

NO CALLES, MUJER



Acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres
víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de
los barrios Irotama, La Equidad, Divino Niño II y
Ondas del Caribe de la ciudad de Santa Marta D. T. C.
H. - Colombia



FUNDEHUVICOL
Santa Marta D. T. C. H.
- Colombia

NO CALLES, MUJER

Acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de los barrios Irotama, Ciudad Equidad, Divino Niño II y Ondas del Caribe de la ciudad de Santa Marta D. T. C. H. - Colombia

AUTORES:

**ADRIANA MARGARITA CRUZ BOLÍVAR
CARLOS ANDRÉS DÍAZ GUERRA
DANESA YOVANA HENRÍQUEZ BARROS
AURA ROSA MELO CASTRO
ROSELYS MERCADO PÉREZ**

**TUTOR
PHD. PABLO VERA SALAZAR**

**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
SANTA MARTA D. T. C. H.
2015**

*A la memoria de nuestra compañera Silvia Sabrina Alexandra Rojas Aguirre (Q.E.P.D)
y de todas aquellas mujeres que ocultan su sufrimiento.
En apoyo a la lucha contra el miedo a denunciar.*

*A Dios, ser maravilloso y todopoderoso,
que nos dio la fuerza y fe necesaria
para cumplir una meta más nuestra mi vida.*

*A nuestras familias, a la Universidad,
docentes y compañeros de clases.*

*A la señora MARÍA CHOLES TORO,
Directora de FUNDEHUVICOL,
por abrimos las puertas de su fundación
para desarrollar este proyecto.*

A nuestros sueños.

TABLA DE CONTENIDO

Resumen y palabras claves (Abstract and key words)

INTRODUCCIÓN

1. JUSTIFICACIÓN	p. 3
2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y NORMATIVA DEL PROYECTO	
2.1. Fundamentación teórica	p. 9
2.2. Fundamentos normativos	p. 18
2.1.1 Normativa internacional	
i) <i>Protección de los Derechos Humanos de las mujeres.</i>	
ii) <i>Protección frente a las violaciones contra las mujeres</i>	
2.1.2 Normativa colombiana	
3. ENTIDADES PARTICIPANTES	p. 47
4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO	p. 49
4.1. Breve síntesis del contexto de violencia en la ciudad de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico - D. T. C. H. – Colombia.	
4.2. Características geopolíticas de Santa Marta D. T. C. H.	
4.3. Razón de la población objetivo.	
5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	p. 55
5.1 Identificación de los derechos vulnerados	
5.2 Identificación de los sujetos de derechos.	
5.3 Identificación de los sujetos de deberes u obligaciones.	
5.4 Consecuencias Jurídicas.	

6.	POBLACIÓN OBJETIVO Y ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN	p. 64
7.	OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS	p. 67
7.1	Objetivo general	
7.2	Objetivos específicos	
7.3	Resultados esperados.	
8.	ESTRATEGIA DE EJECUCION	p. 70
8.1	Cronograma de Actividades	
8.2	Impactos a corto y mediano plazo	
8.2.1	Cualitativos	
8.2.2	Cuantitativos	
8.2.3	Viabilidad y sostenibilidad	
8.2.4	Condiciones y factores internos	
9.	MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	p. 77
10.	PRESUPUESTO POR PARTIDAS	p. 86
11.	GLOSARIO	p. 87
12.	ANEXOS	p. 89
	BIBLIOGRAFÍA	p. 90

LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Estadística de víctimas de violencia sexual.....	18
Tabla 2: Entidades participantes.....	46
Tabla 3: Departamentos y Municipios en los que se realizó encuesta ENVISE...48	
Tabla 4: Mapa Departamento del Magdalena.....	51
Tabla 5: División administrativa Distrito de Santa Marta.....	52
Tabla 6: Mapa división administrativa Distrito de Santa Marta.....	53
Tabla 7: Matriz de planificación del proyecto.....	79
Tabla 8: Presupuesto.....	85

INTRODUCCIÓN

La situación de violencia contra las mujeres en Colombia no está restringida al marco del conflicto armado. Las cifras de violencia sexual en otros contextos son también alarmantes y de magnitudes relevantes. No obstante, el conflicto armado exacerba las diversas formas de violencia de género que históricamente han afectado a las mujeres e incluso reproduce con mayor crueldad, mayor sevicia, e incluso mayor impunidad, prácticas de violencia que también ocurren en tiempos de paz, de tal manera que la violencia contra las mujeres es un continuum de violencia que las afecta tanto en tiempos de paz como de guerra, que va tomando diversas formas y reproduciéndose en todos los escenarios sociales, con el denominador común de la subordinación y la discriminación de las mujeres.

Este documento ilustra la situación de la violencia sexual contra las mujeres en Colombia en el contexto del conflicto armado, busca brindar a la comunidad samaria información para un tratamiento adecuado y oportuno sobre este tipo de violencia y dar a quienes toman decisiones en las instancias estatales elementos que les permitan contar con mayores argumentos para promover cambios a favor de más y mejores garantías de protección, de acceso a la justicia y de reparación a las mujeres víctimas.

El proyecto social *“No calles, mujer”* puede dividirse en tres (3) secciones, la primera, se compone de fundamentación teórica, en el cual se presentan las características del problema de la violencia sexual contra las mujeres en el país; y de un marco normativo nacional e internacional, que describe las normas que protegen jurídicamente a las mujeres colombianas frente a la violencia sexual en el conflicto.

En la segunda sección, pretendemos hacer visible la problemática que atraviesan las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto interno armado colombiano residentes en la ciudad de Santa Marta, proponiendo un esquema de intervención, que desde las órbitas jurídica, social y psicológica que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida, brindándoles herramientas que les permitan en todo momento hacer efectivos sus derechos humanos.

En este documento pretendemos intervenir en unas de las arduas tareas que corresponde a la comunidad que ha vivido situaciones generadoras de graves violaciones de los derechos humanos, que imploran, precisamente, su atención y reparación. Esa parte de la realidad que se pretende transformar, constituye un esfuerzo aunado a los esfuerzos y las políticas estatales que persiguen la reparación de las víctimas de la violencia, dentro del marco específico de la justicia transicional y teniendo como eje orientador el enfoque de género, como enfoque diferencial.

“No calles, mujer”, puede ser una contribución a la efectiva aplicación de las medidas asistenciales y de atención dispuestas en la normativa interna, en coadyuvancia a la labor del Estado Colombiano, en busca de saldar las deudas históricas y sobre todo para cumplir con la obligación internacional de cara a una efectiva protección y garantía de las normas internacionales de derechos humanos. Razones que hacen viable la formulación y ejecución de un acompañamiento integral a las mujeres que han callado su sufrimiento y han sufrido la discriminación.

1. JUSTIFICACIÓN

La violencia generalizada y el conflicto armado en Colombia ha ocasionado violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de la población civil, trayendo ondas consecuencias, desencadenadas en fenómenos sociales tales como el desplazamiento forzado, la exclusión social e impunidad, dada la incapacidad del Estado para juzgar la multitud de crímenes cometidos. Las causas del conflicto armado colombiano se conjugan en una amalgama de factores, entre los que cabe destacar la debilidad del Estado, la inequitativa distribución y posesión de la tierra, la existencia de marcadas diferencias económicas, la polarización.

Aunque existen muchas definiciones al respecto de la violencia contra la mujer, para el presente estudio resulta propicio referirse a la contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (también llamada Convención de Belém do Pará, en memoria a la ciudad donde se aprobó; Belem do Pará, Brasil el 9 de junio de 1994), por ser el instrumento de protección en el derecho internacional de carácter vinculante y ratificado por Colombia, cuyo Cuerpo Legislativo la aprobó mediante la Ley 248 de 1995. El artículo 1º de la Convención establece que debe entenderse por violencia contra la mujer *“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.”*

Todo conflicto armado supone la existencia de violencia. No obstante, en dicho conflicto según el Derecho Internacional Humanitario (en adelante DIH) deben respetarse unas normas que no operantes en la realidad para las partes inmersas, pues en el escenario propio del conflicto ocurren transgresiones y sus

víctimas, entre otras, mujeres, padecen actos contra su integridad física o corporal y contra su libertad sexual.

En ese escenario, muchos de los actos atroces cometidos contra las mujeres se han agrupado bajo la denominación de violencia de género, el cual dada sus diversas manifestaciones, a su vez agrupa a la llamada violencia sexual; se utiliza el cuerpo de las mujeres como arma de guerra y objeto sexual, barbarie humana que no sólo causa lesiones físicas, sino también contribuye a: aumento del riesgo a contraer enfermedades de transmisión sexual, afectaciones a su vida reproductiva, traumas psicosociales (tristeza, susto, soledad), daños psicológicos (miedos, rabias, sentimientos suicidas, sueños reiterativos, evitación, baja autoestima, vulneración del mínimo vital) y destruye la capacidad de la mujer para crear y desarrollar su proyecto de vida.

Las organizaciones de mujeres, activistas, fundaciones, ONG, entre otras, han documentado diferentes formas de violencia sexual ejercida contra la mujer. Por ejemplo: violación por parte del agresor; violación perpetrada por más de un hombre; violaciones repetidas en el tiempo; mutilación sexual; prostitución forzada; esclavitud sexual, uniones forzadas, entre otras” (Ministerio de Salud y Protección Social. Dirección de Promoción y Prevención, 2013)

Con la violencia sexual, no sólo se agrede el cuerpo de la mujer sino que se lastiman sus pensamientos, sentimientos y sus creencias de sí mismas y su estar en el mundo, se deterioran las estructuras familiares a las que pertenecen y como resultado, se destruye el tejido social. (Amnistía Internacional, 2011). (Tol W, 2013). La violación de los Derechos Humanos por parte en el marco del conflicto a muchas mujeres víctimas de violencia sexual, ha dado origen a traumas psicológicos y físicos irreparables, lo cual es palpable en muchas familias y comunidades, muchas mujeres fueron víctimas de embarazos no deseados y

producto de ello se vieron en la necesidad de engañar a sus hijos con tal de no decirles la verdad, mientras que otras rechazaron a sus hijos producto de esa violación o en una fatal imposición, obligadas a abortar.

El IV Convenio de Ginebra, relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra, prohíbe los atentados contra la vida y la integridad corporal de los seres humanos y los atentados contra la dignidad de las personas, especialmente tratos humillantes y degradantes, o discriminatorios fundados en diferencia de género. A su vez, el Protocolo II Adicional, fija la protección de la población civil, de todo peligro procedente de operaciones militares, de ataques; prohibiendo los actos o amenazas de violencia dirigido a aterrorizar a dicha población.

Pese a lo previsto en las normas, los actores del conflicto lejos de cumplirlas, han generalizado la violencia, cuyas magnitudes en cifras de víctimas, desplazados y desaparecidos, ha desbordado la capacidad del Estado para afrontar la problemática social que atraviesa el nuestro país.

La dinámica del conflicto, y así lo han evidenciado varios estudios, muestran que la violencia sexual se utiliza como una forma de intimidación, castigo, represalia o de presión para obtener información, es decir, que persigue un objetivo, y por lo tanto se convierte en un mecanismo de la guerra.

En el documento IMPUNIDAD, PONGAMOSLES FIN, Violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado y post conflicto en América Latina, elaborado por la ACNUR – Agencia de la ONU para los Refugiados -, (2005), al referirse al caso de Colombia, consignó que: *“El contexto colombiano está profundamente marcado por el conflicto armado interno. Entre los indicadores más reveladores de la dinámica del conflicto está el desplazamiento forzado de la*

población, consecuencia de una estrategia de guerra. De la población desplazada registrada hasta febrero del 2004, el 50,2% eran mujeres. Se estima que en cuatro de cada diez familias desplazadas, las mujeres ocupan la jefatura del hogar, una cifra situada por encima del porcentaje nacional y aún más elevado en comunidades indígenas y afrodescendientes (49% y 47% respectivamente)”¹.

Adicionalmente, en la actualidad la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV -, a propósito de las consecuencias del conflicto armado, señala que existen aproximadamente por delitos contra la libertad y la integridad sexual: 9.817 casos. Vale decir, que se refieren a los casos denunciados.

Este tipo de violencia se asocia muy estrechamente a los proceso de exclusión y discriminación que han sufrido las mujeres víctimas. Por exclusión, entiéndase la limitación o privación a algunos grupos o personas de oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas, que afectan derechos individuales; se configura a partir de condiciones de género, etnia, edad, lugar de origen, para nombrar lo más determinantes. Y por discriminación, se entiende todo trato injusto y arbitrario sin justificación. Ha dicho la ACNUR: *“la discriminación y exclusión son las dos caras de una misma moneda: la discriminación deviene en exclusión y la exclusión fortalece la discriminación”*.

Sobre este particular, se ha hecho hincapié en las políticas de equidad de género como requisito para el desarrollo y la paz, y un importante apunte se dio con el Plan Director de la Cooperación Española 2004-2008, al recoger las contribuciones de la Plataforma de Acción de la Conferencia de Beijing, que propende por la importancia de las necesidades prácticas y estratégicas de las

¹ Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres, Mujeres Desplazadas: Acciones del gobierno Colombiano, Documento de análisis, marzo de 2004.

mujeres; el reconocimiento de su protección específica, y la prevención de la violencia contra las mujeres en la solución de los conflictos armados. En el mentado Plan, se señala expresamente:

“Asimismo, las mujeres sufren diversas formas de violencia física, sexual y psicológica para la que existen escasos recursos de prevención y tratamiento. El compromiso con el aumento de las capacidades y autonomía de las mujeres prestará especial atención a la defensa de los derechos y seguridad de las mujeres y las niñas, particularmente en relación con la violencia de género en todos los niveles”.

Conforme lo expuesto, este proyecto pretende contribuir al restablecimiento y desarrollo de los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado colombiano, quienes por desidia, negligencia e inoperancia de las entidades públicas vinculadas al proceso de reparación e indemnización no han cumplido su función a cabalidad. Además, un porcentaje amplio de estas mujeres no cuenta con un conocimiento adecuado para el manejo y utilización de las herramientas para la defensa, protección y garantía de sus derechos. En razón de ello, estimamos adecuado busca que a través de medidas psicológicas, sociales y jurídicas, se logre minimizar el impacto de la discriminación y exclusión a que se ven sujetas y evitar futuras re-victimizaciones que trunquen el propósito de la paz.

Asombra y entristece descubrir que la magnitud de los casos de violencia sexual contra la mujer apenas comienza a ser revelada, es una problemática que se ha mantenido invisible, especialmente, debido a que la gran mayoría de víctimas pertenece a pueblos indígenas o afro descendientes y viven en situación de pobreza, expresando la exclusión que caracteriza a nuestra sociedad.

La misión de la presente propuesta se encamina a fortalecer la capacidad para potenciar procesos organizativos autónomos, democráticos, interculturales y con perspectiva de género, en el marco de la promoción, defensa y ejercicio de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por los conflictos armados internos, especialmente por los procesos de desplazamiento, refugio y otras formas de desarraigo.

También, motiva la realización de este proyecto contribuir al restablecimiento y desarrollo de los derechos humanos de la mujer víctima de violencia sexual, con miras en la reintegración a la sociedad sin temores, brindándoles ayuda psicológica y aportándoles las herramientas jurídicas para denunciar y sembrar semillas para la eliminación de la impunidad y de las causas de la violencia sexual contra la mujer.

En el mismo sentido, pretendemos realizar un acompañamiento integral desde tres (3) órbitas: jurídica, social y psicológica, para fortalecer las organizaciones de mujeres víctimas, en su proceso de reparación y de participación en los barrios Irotama, Equidad, Divino Niño y Onda del Caribe de la ciudad de Santa Marta D. T. C. H., en donde se concentran gran número de estas mujeres.

Finalmente, desde la experiencia de la Pastoral Social², frente a la discriminación y exclusión de la mujer víctima de violencia sexual, se ha descuidado su atención, se la ha marginado y cerrado puertas para su atención y reparación. Esto se debe a la marcada ignorancia del Estado, que impide que se cumpla la función de proteger a las mujeres y de garantizar la atención y

² Obtenida por la Doctora Aura Melo Castro en su ejercicio profesional.

reparación cuando sus derechos se ven afectados o vulnerados como consecuencia del conflicto armado.

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y NORMATIVA DEL PROYECTO

2.1. Fundamentación teórica

La violencia es un fenómeno de diversa naturaleza sustentada en hondas raíces socioculturales e histórico-políticas, que ha recorrido la historia de la humanidad y se ha expresado de múltiples formas permitiendo a las sociedades jerarquizar y en algunos supuestos legitimar, e incluso naturalizar, sus distintas manifestaciones.³

Pese a que Colombia es el país que ha padecido un conflicto armado por más de seis décadas, uno de los más extensos de la historia del mundo, los esfuerzos por superar las trágicas consecuencias de su legado se han enfocado hacia la lucha contra la concentración de la tierra, el despojo y el narcotráfico, ignorando otros factores, que cometidos en el marco del conflicto también generan profundas iniquidades sociales y requieren la implementación de políticas específicas y la atención de otras manifestaciones de violencia, tales como la violencia sexual contra la mujer.

Los enfrentamientos constantes entre los que han sido llamados como actores del conflicto; fuerza pública, paramilitares, guerrilla, han hecho que la

³ Impunidad Pongámosle Fin. Violencia sexual en conflicto armado y post conflicto en América Latina. Consejería en Proyectos PCS Internacional apoyada por un conjunto de agencias internacionales de Cooperación de Europa y Canadá, de la que forman parte como junta directiva Inter Pares de Canadá, Heks (Swiss Interchurch Aid) y el Consejo Danés para los Refugiados.

sociedad civil identifique como parte de su cotidianidad muchas transgresiones a sus derechos humanos y al derecho internacional humanitario, lo que sólo contribuye a la impunidad y a que muchas prácticas abusivas de la guerra continúen, se re definan o adquieran nuevas facetas, acrecentando la ignorancia frente a éstas y frente al sufrimiento silencioso de sus víctimas.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la violencia contra las mujeres es utilizada como estrategia de guerra por todos los actores armados del conflicto colombiano. Igualmente, pone de relieve cómo las mujeres sufren de violencia física, psicológica y sexual diseñada para herir al enemigo, deshumanizar a la víctima y/o sembrar el terror en la comunidad⁴.

Aunque existen diferentes definiciones sobre la violencia contra la mujer, en este documento se toma como base de partida la contenida en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará) mencionado con precedencia en el acápite de justificación, ya que, como se explicó es un instrumento de protección del derecho internacional, de carácter vinculante generado en la región y ratificado por Colombia; específico para abordar la problemática de la violencia.

“...debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (artículo 1°). Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica...” (Artículo 2°).

Esta acepción, en tanto que parte del reconocimiento de afectación a individuos o grupos sobre la base de género, provee un nuevo contexto para la

⁴ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ‘Las Mujeres Frente a La Violencia y La Discriminación Derivadas del Conflicto Armado en Colombia’, OEA/Ser.L/V/II, Doc. 67, 18 de octubre de 2006, pp. 5-6. <http://www.cidh.org/women/Colombi06sp/Women%20Colombia%20Spa%202006.pdf>

comprensión de la violencia contra las mujeres, porque refleja las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado y recoge el abrumador contexto de la violencia⁵.

Es menester resaltar que si bien es cierto la violencia sexual forma parte de la violencia de género y, en este caso, se centra en el género femenino, no lo es menos el hecho que los actos atroces cometidos y englobados en dicha definición, también afecta de manera directa a los hombres, quienes también son objeto de abusos sexuales. Sin embargo, el significado y las consecuencias que para la salud emocional y reproductiva de las mujeres tienen el conjunto de delitos y atentados contra su dignidad y sus derechos humanos difieren de los sufridos por los varones.

En ese sentido, un gran porcentaje de los abusos de esta naturaleza cometidos contra las mujeres, se llevaron a cabo con la intención de herir al hombre. Es decir, a las mujeres se las viola para castigar a los varones con los que están unidas o alguna vez lo estuvieron, o con quienes mantienen algún tipo de vínculo o parentesco. El mensaje para los varones es: "violo tu mujer, tu propiedad, te afrento a ti y el honor de tu familia", además de recordarles que han fallado en su rol de protectores. De este modo, la violencia sexual contra las mujeres implica el ejercicio de poder sobre ellas, pero también sobre los hombres⁶. El acto de violación sexual buscará quebrar emocionalmente a los varones, usando como premio o trofeo el cuerpo de la mujer.

Es frustrante entender que "la violencia sexual desafía las nociones convencionales de lo que constituye una amenaza para la seguridad... (es) Más

⁵ Ibidem. Óp. Cita 3. P. 14.

⁶ Ídem.

barata que las balas, no requiere ningún sistema de armas que no sea la intimidación física, por lo que es de bajo costo, pero de alto impacto”.⁷

Dentro del conflicto armado colombiano han podido identificarse diferentes expresiones de este tipo de agresión:

1. *Violencia sexual y de género utilizada para ejercer control social*: entendida como la violencia sexual para imponer el control social sobre las actividades cotidianas de las mujeres, se les imponen códigos particulares de conducta, y si los transgreden son castigadas. El cual en ocasiones también incluye la estigmatización pública
2. *Violencia sexual y esclavitud sexual*: sin importar la edad, las mujeres han sido sometidas a seducción o la fuerza a la prostitución, al reclutamiento forzado como combatientes y con el fin de prestar sus servicios sexuales, obligadas a utilizar métodos anticonceptivos, tener relaciones sexuales y en caso de quedar embarazadas, abortar.
3. *Violencia sexual dentro de las operaciones armadas*: la Unidad Nacional de la Fiscalía General de la Oficina de Justicia y Paz y un comité del Gobierno alemán han comenzado a recopilar los casos de ‘crueldad extrema’ contra mujeres, por parte de grupos ilegales, que se produjeron luego de incursiones en comunidades y masacres; hasta ahora han recopilado 81 casos. Estos abusos contra las mujeres rara vez fueron informados, ya que, según las víctimas, no había garantías para ellas en el sistema de justicia. Con frecuencia esto se debía a que no se les creía, o a que la policía no tomaba ninguna medida, se negaba a documentar su caso, o

⁷ UN Women, Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice, octubre de 2012, p. 10. Traducción no oficial.

porque temían por su seguridad. Las Fuerzas de Seguridad del Estado contribuyen con la falta de garantías para que se haga justicia, ya que en muchos casos son las autores de la violencia sexual contra las mujeres.⁸

4. *Violencia sexual y las fuerzas de seguridad:* Aunque la violencia sexual es perpetrada por todos los actores armados, tanto estatales como no estatales, el impacto de participación en la violencia sexual por las Fuerzas de Seguridad del Estado (Ejército y de Policía), tiene un efecto particularmente devastador, ya que ellas tienen el mandato de proteger a la población civil.

El desconocimiento, la impunidad y la falta de investigaciones al respecto, fueron los principales factores que contribuyeron a que en Colombia sólo hasta el año 2010, se haya podido establecer, bajo datos aproximados, la magnitud de los hechos que configuran o se describen en la actualidad dentro de la expresión "violencia sexual contra la mujer".

Es así, como la ONG colombiana Casa de la Mujer diseñó la investigación y realizó la PRIMERA ENCUESTA DE PREVALENCIA "VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO", Colombia 2001 - 2010 en el marco de la campaña "Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra" impulsada por la confederación internacional de organizaciones no gubernamentales Oxfam con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. Investigación que fue realizada con el objeto de dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿Qué tan frecuente es la violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano? ¿Qué porcentaje de mujeres ha sido víctima de la violencia sexual en

⁸ Colombia: Mujeres, Violencia Sexual en el Conflicto y el proceso de Paz. ABColombia, SISMA MUJER, U. S. OFFICE ON COLOMBIA. P. 11.

los municipios con presencia de Fuerza Pública, paramilitares y guerrilla? ¿Cuáles son las formas de violencia sexual que viven las mujeres? ¿Quiénes son sus agresores? ¿Cuál es la edad, la etnia, el nivel educativo, la situación económica de las mujeres víctimas de la violencia sexual? ¿Consideran las mujeres la violencia sexual un delito y una violación de los derechos humanos? ¿Denuncian las mujeres los actos de violencia sexual, a qué instancias recurren y cuáles son las razones por las que no denuncian? ¿Consideran las mujeres que la presencia de la Fuerza Pública, de la guerrilla y de los paramilitares ha incrementado la violencia sexual en lo público y en lo privado?⁹

Para obtener las bases estadísticas, dicha investigación lo constituyeron mujeres entre 15 y 44 años, habitantes de los 407 municipios que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) que la Defensoría del Pueblo presentó para el periodo 2001-2007 con algún tipo de evidencia de conflicto armado. Se seleccionó una muestra de dicho universo y la investigación se situó geográficamente en 15 municipios de 11 departamentos. Además se establecieron 3 estratos teniendo en cuenta el tamaño del municipio.¹⁰

La elaboración de los instrumentos de investigación incluyó la preparación de un cuestionario de encuesta y de un manual de campo. El cuestionario fue dividido en cuatro partes en los que de manera progresiva se fue adentrando en el tema de la violencia sexual: (1) aspectos generales de identificación básica, (2) percepciones y conocimientos de los actos de violencia en contra de las mujeres

⁹Campaña “Violaciones y Otras Violencias SAQUEN MI CUERPO DE LA GUERRA” PRIMERA ENCUESTA DE PREVALENCIA “VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO” COLOMBIA 2001-2009. http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/101206_Primer_Encuesta_de_Prevalencia.pdf p. 4.

¹⁰Ibidem p. 5

en los municipios estudiados, (3) casos que la encuestada conoce sobre violencia sexual y (4) reconocimiento de la encuestada como víctima de estos actos.¹¹

La aplicación de la encuesta se llevó a cabo entre el 1 de junio y el 12 de julio de 2010 a un total de 2.693 mujeres. De acuerdo con las estimaciones producto de la encuesta de prevalencia, la población total de mujeres en el rango de edad de 15 a 44 años en los 407 municipios de estudio fue de 2.785.009. Las conclusiones de este estudio son estadísticamente válidas para este universo de población y así se resalta en este documento. Los datos obtenidos reflejan la gravedad y alta prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado.¹²

El estudio en comento fue meramente descriptivo y no pretendió identificar las relaciones causales de violencia sexual en contra de las mujeres. Su utilidad prima en cuanto permitió estimar la magnitud y distribución de la violencia sexual en el contexto del conflicto armado, como un continuum en la vida de las mujeres, su frecuencia, los espacios en los cuales sucede, los agresores y sus tipos. Igualmente, como bases teóricas tomó como referentes los siguientes tipos de actos que constituyen violencia sexual:

- Violación: entendida *“como el acto de forzar a tener relaciones o contactos sexuales a una persona sin su consentimiento empleando violencia o la amenaza de usarla en la acción. Se trata por tanto del contacto sexual no consentido o forzado que puede incluir o no penetración vaginal o anal, sexo oral, o penetración con objetos”*¹³.

¹¹ Ídem.

¹² Ídem.

¹³ Ibídem p. 11

- Prostitución forzada: se entendió *“la acción o conjunto de acciones que involucran la obtención por imposición de servicios sexuales o el acceso a través de violación u otras formas de violencia sexual a cambio de las cuales la víctima o generalmente quien la controla recibe remuneración pecuniaria.”*¹⁴
- Embarazo forzado: se entendió *“la acción de control sobre una mujer embarazada, cuya pretensión de dominio busca asegurarse la continuación de su embarazo o el nacimiento de su hijo en contra de la voluntad de la madre; este embarazo puede ser el resultado de una violación, 15 pero no siempre ésta es la causa. De igual manera, en muchas ocasiones este intento de control incluye el confinamiento ilícito de la mujer embarazada”.*¹⁵
- Aborto forzado: se entendió *“el acto que tiene como finalidad la interrupción inducida de un embarazo contra la voluntad de la mujer en embarazo”.*¹⁶
- Esterilización forzada: *“la acción de planificación reproductiva producto de la obligación no consentida de la persona afectada”.*¹⁷
- Acoso sexual: se entendió *“cualquier presión o insinuación no deseada por la persona que lo recibe y que busca la satisfacción de deseos sexuales. Puede darse a través de actos, propuestas, ofensas, gestos obscenos o comentarios sexuales. En ese sentido, se consideró como la intromisión*

¹⁴ Ibídem p. 13

¹⁵ Ibídem pp. 14 y 15.

¹⁶ Ibídem p.16.

¹⁷ Ibídem p 18.

indeseada y no buscada, en los sentimientos, pensamientos, conductas, espacio, tiempo, energías y cuerpo de una mujer o una niña".¹⁸

- Servicios domésticos forzados: se entendió el *"conjunto de acciones mediante el cual generalmente un grupo que detenta la fuerza obliga a una persona o personas a realizar para ellos labores domésticas que pueden trascender incluso a actos sexuales"*.¹⁹
- Regulación de la vida social: se consideró *"el acto o conjunto de actos por los cuales, mediante el uso de la fuerza o amenaza de ella, se busca establecer patrones de comportamiento y conducta social. Entre los principales se encuentran el control de la sexualidad y la regulación de la vida afectiva. Así por ejemplo, impedir que las mujeres usen cierta clase de vestidos so pena de ser castigadas, impedirles asistir a determinado tipo de eventos o de tener cierto tipo de relaciones, 24 establecer distintas formas de controles sobre los tiempos y los espacios de las víctimas, con el fin de regular, entre otros, los sistemas de relación social y sexual"*.²⁰

Desde el punto de vista teórico el enfoque de investigación se enmarcó en la teoría feminista y por ende, en la comprensión de las violencias en contra de las mujeres como un contínuum en sus vidas y no como expresiones inconexas, de rabia o pérdida de control de los varones. De ahí que se consideró la violencia sexual en sus múltiples expresiones, y no solamente como violación o acoso sexual. Por ello, para la encuesta se amplió el espectro de las violencias y se incluyeron algunas tipificadas por el código penal colombiano y otras que aún no lo están como la regulación de la vida social.

¹⁸ Ibidem p. 20

¹⁹ Ibidem p. 22.

²⁰ Ibidem pp. 23 y 24.

Estimaciones de víctimas de actos de violencia sexual, víctimas de cada acto de violencia sexual que no reconocieron ser víctimas y porcentaje de desconocimiento de violencia sexual por tipo de acto de violencia sexual

TIPO DE VIOLENCIA SEXUAL	Estimación de víctimas de actos de violencia sexual	Estimación de víctimas que no reconocieron serlo	% de desconocimiento
Violación	94.565	0	0
Prostitución forzada	7.754	0	0
Embarazo forzado	26.353	4.965	18,84
Aborto forzado	27.058	3.232	11,94
Esterilización forzada	19.422	11.366	58,52
Acoso sexual	175.873	77.803	44,24
Servicios domésticos forzados	48.554	22.471	46,28
Regulación de la vida social	326.891	238.130	72,85

Fuente: Encuesta ENVISE Colombia. 2001-2009. Cálculos del estudio.

Tabla No. 1. Tomado de Campaña “Violaciones y Otras Violencias SAQUEN MI CUERPO DE LA GUERRA” PRIMERA ENCUESTA DE PREVALENCIA “VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO” COLOMBIA 2001-2009.²¹

No obstante, pese a que al año 2010 pudieron obtenerse datos aproximados frente a la magnitud de la violencia sexual contra las mujeres, relacionadas con el conflicto en Colombia, no ha sido entendida aun completamente. Cuando es denunciado las mujeres encuentran grandes obstáculos para acceder a la justicia, incluyendo altísimos niveles de impunidad.

2.2. Fundamentos normativos

2.2.1. Normativa internacional

Se distinguen dos ámbitos: i) la protección de los Derechos Humanos de las mujeres y ii) la protección frente a la violencia contra las mujeres.

²¹

http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/101206_Primer_Encuesta_de_Prevalencia.pdf p. 9

i) Protección de los Derechos Humanos de las mujeres.

A través de la historia, las mujeres han librado una ardua batalla para el reconocimiento de sus derechos, debido a la concepción patriarcal que otrora ha campeado en las sociedades, dentro de la cual, la mujer ha sido vista, pensada y tomada como propiedad y objeto de los hombres. El desarrollo normativo internacional de los derechos humanos, se ha marcado precisamente por esa lucha de las mujeres en busca de la igualdad y el respeto de su dignidad. Las primeras declaraciones sobre derechos humanos, incluso en su forma nominativa excluían a la mujer de su formulación, fue así como llamaron a la primera manifestación de reivindicación de los derechos: Declaración de los Derechos de Hombre y del Ciudadano (consecuencia de la Revolución Francesa). Esta Declaración de plano excluía en términos semánticos y prácticos a la mujer.

Después de la Primera Guerra Mundial, se abre camino a la igualdad de género; pero su expansión internacionalmente se dio luego del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, posterior a la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. De ahí, y en el marco de la misión de la ONU, se adoptaron importantes instrumentos en los que se consignaron de manera específica el reconocimiento de nuevos derechos, estos son: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos en 1966. En 1979, y de manera más específica se dio la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que enseguida se convirtió en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 17 de julio de 1981, y que recogió derechos específicos para este colectivo, imponiéndole a los Estados el compromiso de cumplir la Convención mediante la adopción de medidas –normativas y políticas– encaminadas a ese objetivo.

Esta Convención se constituye en el único instrumento de carácter contractual y universal de protección, que estableció un sistema de control y supervisión para su aplicación; que impone a los Estados Partes la obligación de adoptar las medidas necesarias que garanticen la eliminación de la discriminación contra la mujer. Además es un instrumento que posee unas características propias, en el sentido que reconoce la complejidad del término discriminación, y amplía el concepto de ejecutores o actores materiales de las violaciones a las personas físicas o morales, ampliando a su vez, el ámbito de responsabilidad del Estado.

En la Convención se estipuló: la definición de discriminación contra la mujer, los principios básicos y los compromisos de los Estados de prohibir y eliminar la discriminación, adoptar medidas y programas de desarrollo político, económico y social que propendan por igualdad y goce efectivo de los derechos humanos de las mujeres, adoptar medidas para lograr la igualdad de hombres y mujeres, y cambiar modelos, estereotipos y costumbres socio-culturales, y eliminar el tráfico de mujeres y niñas y la explotación de la prostitución. De igual forma, revalidó los derechos civiles y políticos de las mujeres, obligando a los Estados a promover la participación igualitaria en el ámbito política y social. Reafirmó los derechos sociales, económicos y culturales de las mujeres, dirigidos a la oportunidad igualitaria en materia de educación, capacitación, formación, trabajo, prestaciones. También consagra la capacidad jurídica de las mujeres y su participación en aspectos de familia. Establece un Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos: fija un mecanismo de vigilancia y supervisión para el cumplimiento de la Convención, imponiendo la obligación de los Estados de rendir informes regulares sobre la aplicación efectiva de la Convención.

Para el caso específico de la CEDAW, El Comité para la Eliminación de las formas de Discriminación contra la Mujer, es el encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención. Este Comité emitió la Recomendación No. 19, concretamente sugiriendo a los Estados, entre otras importantes, la siguientes: i) adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos de violencia por razones de sexo tanto públicos como privados; ii) velar por el las leyes contra la violencia y malos tratos, violación y ataques sexuales protejan adecuadamente a todas la mujer en su integridad y dignidad, proporcionando protección víctimas y apoyo apropiado a las víctimas; iii) recopilar e investigar las causas y efectos de la violencia, y las medidas para prevenirla; iv) adoptar medidas eficaces para garantizar que los medios de comunicación respeten a la mujer y promuevan; v) establecer medidas para superar la violencia generada en actitudes, costumbres y prácticas que engendren esa violencia. Por solo mencionar algunas.

Otro tanto, el Protocolo Facultativo de la Convención fue adoptado por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1999, mismo año en que fue abierto a la firmas de los Estados Partes de la Convención. Entro en vigor en año 2000. Este Protocolo dentro de sus disposiciones consagra el compromiso de los Estados Partes de reconocer la competencia del Comité para examinar las comunicaciones presentadas por los particulares; las características de estas comunicaciones, criterios de admisibilidad; habilita al Comité para solicitar a los Estados la adopción de medidas cautelares frente a un daño inminente. Todo esto hace parte del procedimiento de comunicaciones.

En cuanto al procedimiento de investigación. El Protocolo dispone que el Comité puede iniciar investigación confidencial, cuando haya tenido conocimiento de graves o sistemáticas violaciones a los derechos estipulados Convención.

El Protocolo adicionó una cláusula de exclusión a la competencia del Comité en cuanto al procedimiento de investigación, lo cual ha generado críticas pues la misma implica una reserva a dicho procedimiento, la cual se prohíbe en el artículo 17.

Otro instrumento de gran valor para la protección de los Derechos Humanos, lo constituye el Estatuto de Roma.

ii) Protección frente a las violaciones contra las mujeres

La aplicación de los Convenios de protección de los derechos humanos se deben aplicar en todo momento -tiempo de paz y de guerra-; no obstante existen disposiciones de aplicación exclusiva en tiempos de guerra, que desarrollan el marco normativo del Derecho Internacional Humanitario –DIH-, y que constituye las reglas de la guerra. El DIH, está compuesto normativamente por los Convenios de Ginebra y sus Protocolo. Pero en ninguno de estos instrumentos se caracteriza la violencia sexual, por lo tanto tuvo que ser necesario que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos²², reconociera que la violencia o agresión sexual se entiende como una clase de tortura, siempre que con ella se busque un determinado objetivo: intimidación, castigo, obtener información, represalia, etc.

No obstante, en 1994 la Organización de Estados Americanos – OEA -, el día 9 de junio, durante el Vigésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General, reunida en la ciudad de Belém do Pará (Brasil), adopta la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que en adelante se distingue también con el nombre de Convención de Belém do Pará, en la cual se reconoce que la violencia contra las

²² Informe No. 5/96. Caso Raquel Martín de Mejía vs. Perú.

mujeres es una violación a los derechos humanos, cuyo fundamento histórico político se encuentra en las desigualdades en las relaciones de poder entre hombre y mujeres y que instituye medidas jurídicas, pedagógicas destinadas a lograr el objetivo por el cual se adoptó.

Esta convención, también es llamada por la OEA -, “La Joya de la Corona”, porque es la única Convención que existe en el mundo sobre violencia contra la mujer. La Convención de Belém do Pará, es el instrumento internacional más valioso a la hora de tratar la violencia contra las mujeres, centrando su objetivo en *la lucha contra esta manifestación extrema de la discriminación estructural y social que viven las mujeres*²³.

En cuanto a la estructura de la Convención de Belém do Pará, ésta se compone de: Definiciones y marco general; Listado de derechos (se reafirman derechos reconocidos en otros tratados y se incorporan otros); y, mecanismos de seguimiento (Informes periódicos y comunicaciones individuales a la CIDH).

La Convención, además de consignar con claridad la definición de violencia contra las mujeres, dispone su articulado para determinar: i) quienes cometen los actos de violencia (actores); ii) en qué lugar se cometen (contexto); iii) las medidas administrativas y legislativas que deben adoptar los Estados que suscribieron la Convención; iv) medidas para garantizar el acceso a la justicia. Basado en que el origen de la violencia contra las mujeres es efecto de una sociedad sexista, en la cual a través de la violencia y el abuso –mecanismos-, se perpetúa la histórica condición de subordinación a la que se han visto compelidas las mujeres.

²³ XX Aniversario. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belém do Pará. 1994-2014. LLAMAMIENTO A CONMEMORAR

Desde la Declaración de los Derechos Humanos, la humanidad ha consolidado el reconocimiento del respeto de la dignidad humana, traducidos en diversos instrumentos que constituyen importantes avances en materia social, y en ese sentido, la Convención de Belém do Pará, es una colosal conquista de las mujeres de este hemisferio, de las organizaciones civiles y en últimas de los Estados, en la búsqueda de la eliminación de los paradigmas que han impedido a las mujeres el goce efectivo de sus derechos, propugnando por una sociedad que pase de ser sexista y patriarcal a una sociedad igualitaria, inclusiva y pacífica.

El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará está integrado por personas especializadas en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y en la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres designados por los gobiernos, cuya función realizan independiente, autónoma y personalmente. Su función es la vigilancia especializada y permanente del cumplimiento de la Convención por parte de los Estados que la han ratificado, y ante la cual los Estados deben informar los avances realizados en el cumplimiento de la Convención, aceptando implementar las recomendaciones que emanen del mismo.

Sus objetivos son: 1. Hacer seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados Parte; 2. Contribuir al logro de los mandatos contenidos en la Convención; y 3. Facilitar la cooperación técnica entre los Estados Parte así como con otros Estados miembros de la OEA y Observadores participantes.

La violencia contra las mujeres en el marco de los conflictos armados también ha sido abordada por instrumentos internacionales como las resoluciones 1325 de 2000 y 1820 de 2008, adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La Resolución 1325 reconoce que las mujeres, los niños y las

niñas son la inmensa mayoría de las víctimas de los conflictos armados.²⁴ Por tanto, “Insta a todas las partes en un conflicto armado a que adopten medidas especiales para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por razón de género, particularmente la violación y otras formas de abusos sexuales, y todas las demás formas de violencia en situaciones de conflicto armado”²⁵; hace énfasis en la responsabilidad de los Estados de acabar con la impunidad de la violencia sexual, para lo cual, los Estados deben “enjuiciar a los culpables de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, especialmente los relacionados con la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas”²⁶.

En la Resolución 1820, el Consejo de Seguridad observa con preocupación que la violencia sexual en el marco de los conflictos armados ejercida contra las mujeres y las niñas se utiliza incluso como táctica de guerra para humillar, dominar, atemorizar o reasentar por la fuerza a poblaciones civiles¹⁰⁸ y que a pesar de la repetida condena de la violencia contra las mujeres en situaciones de conflicto armado, incluida la violencia sexual²⁷, “tales actos siguen ocurriendo y en algunas situaciones se han vuelto sistemáticos y generalizados y han alcanzado un grado alarmante de brutalidad”²⁸. En consecuencia, la Resolución “exige que todas las partes en conflictos armados pongan fin sin dilación y por completo a todos los actos de violencia sexual contra civiles, con efecto inmediato” y que adopten de inmediato “medidas apropiadas para proteger a los civiles, incluidas las mujeres y las niñas, de todas las formas de violencia sexual”²⁹; señala que la

²⁴ Consejo de Seguridad de la ONU. Resolución 1325 de 31 de octubre de 2000. S/RES/1325 (2000), párr. 4

²⁵ *Ibidem*, punto resolutivo 10.

²⁶ *Ibidem*, punto resolutivo 11.

²⁷ Situación en Colombia de la violencia sexual contra las mujeres. Elaboración del documento María Clara Galvis. Documento realizado en el marco del Proyecto Estrategia integral de incidencia a favor de las mujeres víctimas de violencia sexual en Colombia, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación. Internacional para el Desarrollo - Junta de Extremadura / Convocatoria 2008. Proyecto que se realiza en coordinación con Fundación Mujeres de España p. 31.

²⁸ Consejo de Seguridad de la ONU. Resolución 1820 de 19 de junio de 2008. S/RES/1820 (2008), párr. 6.

²⁹ *Ibidem*, párr. 8

violación y otras formas de violencia sexual pueden constituir crímenes de guerra, de lesa humanidad o actos de genocidio y “destaca la necesidad de que los crímenes de violencia sexual queden excluidos de las disposiciones de amnistía en el contexto de los procesos de solución de conflictos”³⁰.

Así mismo, hace un llamamiento a los Estados para que enjuicien a los responsables de tales actos y “garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las mujeres y las niñas, disfruten en pie de igualdad de la protección de la ley y del acceso a la justicia, y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos”³¹. Finalmente, el Consejo de Seguridad pide al Secretario General y a los organismos pertinentes de Naciones Unidas que en consulta con las mujeres y las organizaciones dirigidas por mujeres, y según resulte apropiado, elaboren mecanismos eficaces para proteger de la violencia, en particular de la violencia sexual, a las mujeres y las niñas en los campamentos de refugiados y desplazados internos administrados por las Naciones Unidas, así como en todos los procesos de desarme, desmovilización y reintegración y en los esfuerzos de reforma de la justicia y del sector de seguridad que reciben asistencia de las Naciones Unidas³².

2.2.2. Normativa colombiana.

Dentro del ámbito interno la protección normativa viene dada en la Ley 599 del 2000 (código penal), que incluyó como delitos algunos actos de violencia sexual que se constituyen en violaciones al Derecho Internacional Humanitario, verbigracia, actos sexuales violentos en personas protegidas.

³⁰ Ibidem, puntos resolutivos 2 y 3.

³¹ Ibidem, punto resolutivo 4

³² Ibidem, punto resolutivo 10

No obstante es preciso manifestar que mucho de los caso de violencia sexual contra las mujeres en conflicto armado no sean investigado, persistiendo impunidad que no hace posible la garantía de los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Ahora, si bien los mentados instrumentos internacionales y nacionales no impiden la materialización de los actos graves de violencia sexual contra las mujeres, luego de su ocurrencia y muy a pesar de las sanciones establecidas para los actores, el estado colombiano reconociendo la necesidad de asistir a las personas víctimas del conflicto armado , ha reunido en la ley 1448 del 2011 una serie de importantes medidas humanitarias, de atención y de asistencia con el objeto de hacer efectivo los derecho a la verdad, la justicia, y la reparación con la garantía de la no repetición dentro de un marco de justicia transicional, con las cual se pretende dignificar a estas personas.

Aunque algunas de estas leyes constituyen un sólido marco jurídico y político en relación con la violencia sexual contra las mujeres, perpetrada tanto dentro como fuera del conflicto, fallan en la aplicación efectiva. En general, la ejecución carece de estrategias bien articuladas, criterios claros y coordinación entre departamentos. Además, no existen sistemas de evaluación eficaz de seguimiento y de evaluación comparativa ni para medir el rendimiento, o identificar los obstáculos y las dificultades. Además de estos elementos está la aparente falta de voluntad política en las distintas fases de ejecución.³³

Cabe destacar que el Gobierno colombiano ha adoptado algunas medidas positivas para abordar la violencia sexual y la igualdad de género, incluyendo el nombramiento de un Asesor para la Equidad de la Mujer, en julio de 2011. Las

³³ Ibídem. Óp. Cita 8 p. 16.

leyes y resoluciones clave que abordan la igualdad de género y la violencia sexual son: Ley 248 de 1995 (por medio de la cual se aprobó la Convención Belem Do Para, Brasil) Ley de Igualdad de Género (Ley 1257 de 2008), Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y el Auto 092 de la Corte Constitucional de 2008.

La Ley 1257, de 2008 "Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones" (también conocida como la Ley de Equidad), describe los derechos de las mujeres y establece algunos derechos esenciales para las mujeres víctimas de violencia sexual, como el derecho al asesoramiento gratuito e inmediato especializada Estado, al asesoramiento jurídico y a la asistencia técnica. El marco constructivo que ofrece esta ley es el resultado de la colaboración con los grupos de mujeres que han trabajado en los diferentes elementos y en el diseño de esta ley.

La promulgación de esta ley constituye un gran avance en la protección de los derechos de las mujeres, puesto que permite garantizarles una vida libre de violencias, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en ejercicio de los derechos relacionados en el ordenamiento jurídico interno e internacional, en el acceso los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.

En su artículo 2º se dispuso la definición de violencia contra la mujer, debiéndose entender por tal *"cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o*

en el privado". Además, señala que "de conformidad con lo estipulado en los planes de acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada a la abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres, por razón de su condición social económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas."

En este sentido, la definición incorporada en la ley respecto a la violencia contra la mujer incorpora obligaciones para el Estado colombiano, porque prevé medidas en relación con sensibilización y prevención, protección, atención y sanciones para los agresores.

La Ley de equidad de género se considera un logro para los derechos de la mujer colombiana, puesto que puede contar con orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, inmediato y especializado desde cualquier autoridad que conozca el hecho. Igualmente, las autoridades tienen el deber de guardar reserva de su identidad y la de su familia y dar o no consentimiento para que les practique exámenes médico legales y además, tiene derecho a escoger el sexo de la persona que la atiende, ser informada sobre todo los procedimientos que puede iniciar y especialmente, sobre sus derechos sexuales y reproductivos. A decidir voluntariamente si puede ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.

Para la aplicación efectiva de la Ley 1257 en mención, la Presidencia de la República de la mano de sus ministros, ha expedido una serie de decretos con el objeto de que sus disposiciones no constituyan una "letra inerte" o inútil para la mujer. En el marco de este desarrollo reglamentario, junto con el Ministerio de

Trabajo expidió el Decreto 4463 de 2011, cuyas normas tienen por objeto definir las acciones necesarias para promover el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres, implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la igualdad salarial y desarrollar campañas de radicación de todo acto de discriminación y violencia contra las mujeres en el ámbito laboral.

Asimismo, expidió el Decreto 4796 de 2011 para reglamentar parcialmente los artículos 8º, 9º, 13 y 19 de la Ley 1257 entre otras disposiciones, en el cual el gobierno de la mano con el Ministerio de Salud y Protección Social, buscó definir las acciones necesarias para detectar, prevenir y atender integralmente, a través de los servicios que garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud a las mujeres víctimas de la violencia e implementar mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud. En el mismo sentido, fue expedido el Decreto 2734 de 2012.

De igual forma, el gobierno junto con el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de Defensa Nacional profirieron el Decreto 4799 de 2011, para reglamentar las leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y 1257 2008, en relación con la competencia de la Comisaría de Familia, la Fiscalía General de la Nación, los juzgados civiles y los jueces de control de garantías, de manera que se garantice el efectivo acceso a las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la ley para su protección, como instrumento para radicar todas las formas de violencia contra ellas.

No menos importante, es la promulgación del Decreto 4798 de 2011, *“por el cual se dictan normas de sensibilización prevención y sanción de norma de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”*. Y los decretos 2733 y 2734 de 2012, a través de los cuales se desarrollaron beneficios

tributarios y criterios, condiciones y procedimiento para el otorgamiento de las medidas de atención definidas en el artículo 19 de la Ley 1257 de 2008, los cuales serán de obligatorio cumplimiento por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud -SGSSS y las autoridades competentes para ordenarlas en el marco de las responsabilidades que les fueron asignadas mediante la Ley, respectivamente.

Así las cosas, la Ley 1257 está dirigida a beneficiar a las personas, las familias y la sociedad colombiana a través del favorecimiento de relaciones pacíficas, solidarias, respetuosas e igualitarias entre las personas. Su expedición se hizo conforme la política de adopción de medidas que se denominan acciones afirmativas o medidas de “discriminación positiva” que buscan superar la discriminación mediante el reconocimiento de que la igualdad jurídica no constituye una igualdad real y para el logro de esta permiten un trato diferenciado en circunstancias que se consideren relevantes, mediante la adopción de medidas que den posibilidades a quienes integran esos grupos históricamente discriminados.³⁴

Valga aclarar que la ley al referirse a las mujeres habla de una población con diversidad casi infinita. Mujeres son niñas, ancianas, campesinas, indígenas, afrocolombianas, ROM, lesbianas. Y el término mujeres comprende también mujeres en situación de desplazamiento, de discapacidad, de privación de libertad o que por el hecho de no haber tenido acceso a educación, hablar otro idioma o cualquier otra circunstancia se encuentran en situación de mayor riesgo frente a las violencias. La ley pretende abarcar toda esta diversidad. Varias de sus disposiciones hacen referencia a esta heterogeneidad, tales como los artículos 6 - 6, 9 - 7 y 20. Otro gran aporte necesario, sería que a partir del marco general que

³⁴ RAMÍREZ, Claudia Cecilia. Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres. Herramientas para su aplicación e implementación. SISMA MUJER p. 3.

prevé, se avance en legislaciones específicas que incorporen las necesidades diferenciales de cada uno de estos grupos.³⁵

Para mayor precisión de la representatividad enmarcada por la Ley 1257, es idónea la siguiente descripción:

“La ley se ubica en el lugar del cuestionamiento a esta conducta, se propone la desnaturalización de las violencias contra las mujeres en ámbitos como la familia, la escuela, el trabajo y los medios de comunicación y enmarca toda forma de violencia contra las mujeres como una violación a sus derechos humanos. Esto implica para el Estado el ejercicio de su deber de debida diligencia es decir que debe prevenir, proteger, atender, investigar y sancionar, así como reparar a la víctima de dicha violación. Esta nueva mirada a las violencias contra las mujeres es la que se ve reflejada en la estructura misma de la ley, que en sus diversos capítulos contempla medidas en relación con cada uno de estos campos de actuación del Estado.”³⁶

No obstante lo hasta aquí expuesto, bajo la óptica de miradas objetivas, como resultado de las acciones de seguimiento permanente que adelanta la Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, en relación con el estado de cumplimiento actual de la Ley 1257 de 2008 por parte de las autoridades del Estado y teniendo como referente las obligaciones nacionales e internacionales que a este le competen para garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias, elaboró el II Informe de Seguimiento “Ley 1257, cinco años después”, en el cual en su reporte general avizó obstáculos para el acceso a las medidas de protección de la Ley, entre los que destacamos:

1. La falta de comprensión del carácter integral del modelo de protección previsto en la Ley 1257 de 2008, por parte de los operadores de justicia y las comisarías de familia; las comisarías no tienen desagregada la información de medidas de protección por sexo, lo cual, obstaculiza de

³⁵ Ibídem p. 4.

³⁶ Ibídem p. 7.

entrada el análisis de la información obtenida y desconoce el deber de hacerlo para evitar actos de discriminación. No existe soporte sobre la protección del derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor. Por último, es necesario señalar que la generalidad de las comisarías del país siguen adelantando el trámite y la adopción de las medidas de protección con base en las normas relativas al derecho de familia y no con fundamento en la Ley 1257 de 2008 y su reglamentación.³⁷

2. La reglamentación de las medidas de protección para las mujeres dada por los decretos 4463, 4796, 4798 y 4799 de 2011 y los decretos 2733 y 2734 de 2012, que desarrollan algunos de los temas relacionados con las medidas de protección en salud y trabajo, no fueron consultados con las organizaciones de mujeres, es decir, el Gobierno nacional no permitió ningún mecanismo de participación, y, además, tienen dificultades considerables en su contenido.³⁸
3. (i) la inobservancia de las autoridades del modelo de protección integral previsto en la Ley 1257; (ii) la falta de conocimiento de las autoridades competentes sobre su facultad para ordenar las medidas, y de las entidades responsables para cumplirlas; (iii) la inexistencia de procedimientos internos en las entidades destinatarias de las órdenes para darles trámite, o la consecuente ausencia de respuesta a las órdenes de la autoridad competente; y (iv) la persistencia de un enfoque familista en el trámite y la aplicación de las medidas³⁹.

En el mismo sentido y a manera de conclusión la Mesa expuso que sobre el cumplimiento de la Ley 1257 de 2008 por parte de las autoridades estatales es

³⁷ II Informe de Seguimiento “Ley 1257, cinco años después”. Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Obstáculos para el acceso a las medidas de protección de la Ley 1257 de 2008 pp. 28 y 29.

³⁸ *Ibidem* p. 29

³⁹ *Ídem*.

fundamental que se superen las dificultades normativas, institucionales y estructurales, para que los esfuerzos encaminados a erradicar la violencia impacten la vida de las mujeres en Colombia desde la perspectiva de la atención integral, que implica no solo coordinación interinstitucional sino también mantener la comunicación con las organizaciones de mujeres.⁴⁰

Aún más trascendental en el marco jurídico desarrollado en Colombia en torno a la problemática de la violencia de género en el conflicto armado, no sólo ha sido el apoyo brindado por el poder legislativo y ejecutivo, como hasta el momento se ha esbozado, sino el avance brindado por la honorable Corte Constitucional en el Auto 092 de fecha catorce (14) de abril de dos mil ocho (2008), proferido la intensión de garantizar la Protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T- 025 de 2004, después de la sesión pública de información técnica realizada el 10 de mayo de 2007 ante la Sala Segunda de Revisión.

Con el fin de hacer seguimiento a las órdenes de la T-025, la Corte Constitucional desarrolló dos caminos. El primero, realizar audiencias públicas en las que, cada cierto tiempo, cita al gobierno y le pide cuentas de lo que ha hecho. El segundo camino consiste en expedir providencias, conocidas como autos de seguimiento, con el fin ampliar o aclarar las órdenes al gobierno, solicitar informes, definir indicadores o señales para comparar los avances, etc., todo con el fin de que se supere el estado de cosas inconstitucional. Desde el 2004, año en que se dictó la sentencia T-025, hasta principios del presente año 2010, la Corte Constitucional había expedido alrededor de 80 autos y había hecho 14 audiencias

⁴⁰ Ibídem p. 40.

públicas de discusión. Uno de esos autos es el 092 de 2008, referido a los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento.

El auto tiene como propósito la protección de los derechos fundamentales de las mujeres desplazadas por el conflicto armado en el país, y la prevención del impacto de género desproporcionado del conflicto armado y del desplazamiento forzado.

Las medidas impuestas en esta providencia se agrupan así: 1. Ordenó al gobierno crear 13 programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, de manera tal que se contrarresten efectivamente los riesgos de género en el conflicto armado y las facetas de género del desplazamiento forzado, 2. Estableció dos presunciones constitucionales que amparan a las mujeres desplazadas: (i) que el desplazamiento forzado en las mujeres constituye una situación de vulneración acentuada, lo que obliga a una protección inmediata de sus derechos por parte de las autoridades, y (ii) la prórroga automática de la ayuda humanitaria de emergencia a favor de las mujeres desplazadas, hasta lograr condiciones de autosuficiencia integral, dignidad y estabilidad socioeconómica. 3. Órdenes individuales de protección concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país 4. Comunicación al Fiscal General de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano.

Así mismo, se ordenó trece (13) programas específicos para la mujer desplazada: 1. Prevención del Impacto desproporcionado del desplazamiento 2. Prevención de la violencia sexual contra la mujer 3. Prevención de la violencia intrafamiliar y comunitaria 4. Promoción de la salud 5. Apoyo a las mujeres jefas de hogar, de acceso a oportunidades laborales y productivas y de prevención de la

explotación doméstica y laboral 6. Apoyo educativo para mayores de 15 años 7. Acceso a la propiedad de la tierra 8. Protección de los derechos de las mujeres indígenas 9. Protección de los derechos de las mujeres afrodescendientes 10. Promoción de la participación y prevención de la violencia contra las líderes 11. A la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. 12. Acompañamiento psicosocial 13. Eliminación de las barreras de acceso al sistema de protección

En el ámbito de la prevención del desplazamiento forzoso, la Corte Constitucional identificó diez (10) riesgos de género en el marco del conflicto armado colombiano, es decir, diez factores de vulnerabilidad específicos a los que están expuestas las mujeres por causa de su condición femenina en el marco de la confrontación armada interna colombiana, que no son compartidos por los hombres, y que explican en su conjunto el impacto desproporcionado del desplazamiento forzoso sobre las mujeres. Estos riesgos son:

1. Violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual en el marco del conflicto armado.
2. Explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales.
3. Reclutamiento forzado de sus hijos e hijas por los actores armados al margen de la ley, o de otro tipo de amenazas contra ellos, que se hace más grave cuando la mujer es cabeza de familia.
4. Los derivados del contacto o de las relaciones familiares o personales - voluntarias, accidentales o presuntas- con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país o con miembros de la Fuerza Pública.

5. Los derivados de su pertenencia a organizaciones sociales, comunitarias o políticas de mujeres, o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado.
6. Persecución y asesinato por las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas que implementan los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional.
7. El asesinato o desaparición de su proveedor económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y social.
8. Ser despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales dada su posición histórica ante la propiedad, especialmente las propiedades inmuebles rurales.
9. Los derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrodescendientes.
10. Los originados por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento.

Otro tanto, en el ámbito de la atención a las mujeres víctimas del desplazamiento forzado y de la protección de sus derechos, la Corte Constitucional identificó las facetas de género del desplazamiento forzado, es decir, aspectos del desplazamiento que impactan de manera diferencial, específica y agudizada a las mujeres, por causa de su condición femenina en el marco del conflicto armado colombiano.

Respecto a los patrones de violencia y discriminación de género de índole estructural en la sociedad colombiana, preexistentes al desplazamiento pero que se ven potenciados y degenerados por el mismo, impactando en forma más aguda a las mujeres desplazadas, la Corte identificó:

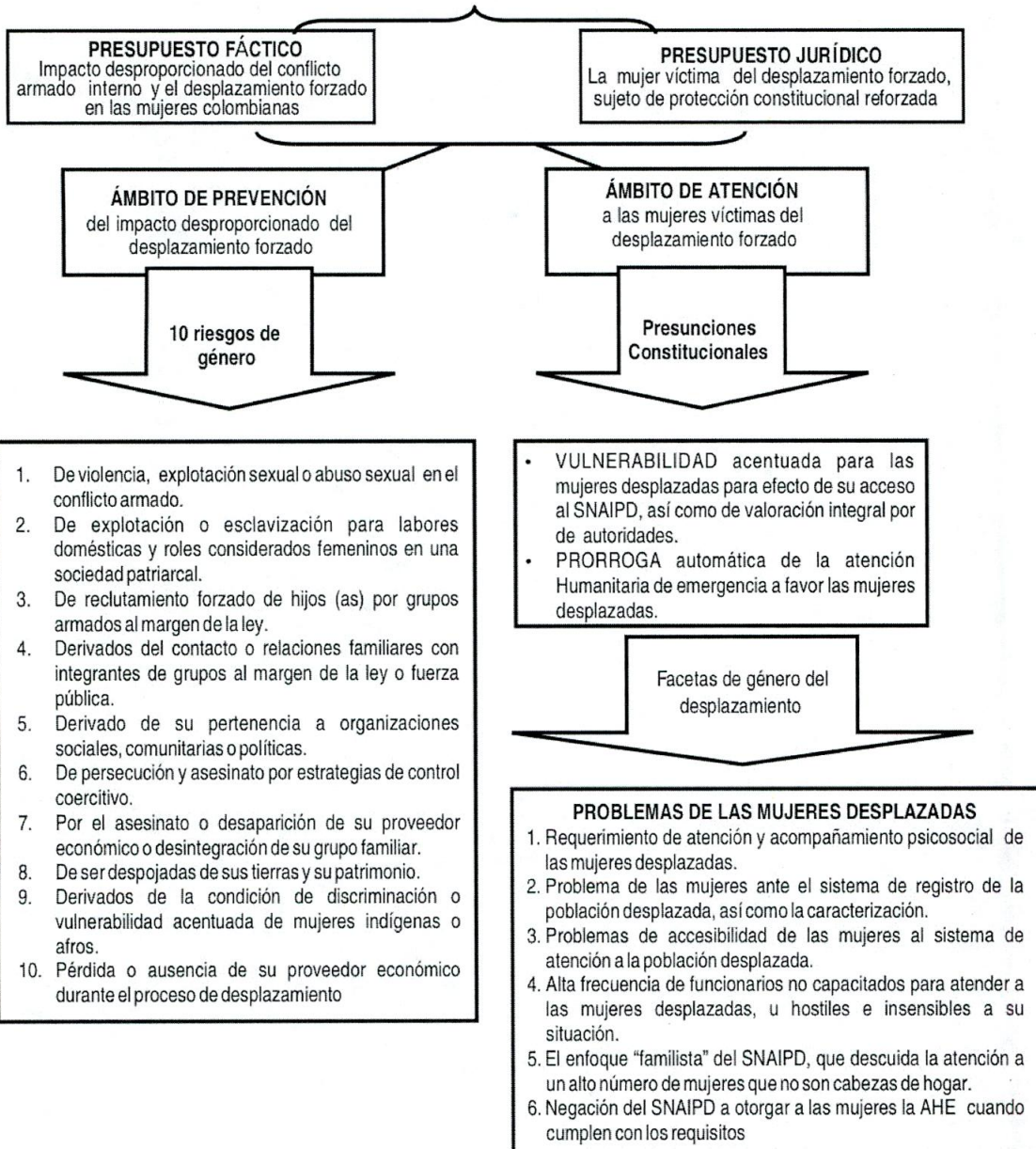
-
- La violencia y el abuso sexuales, incluida la prostitución forzada, la esclavitud sexual o la trata de personas con fines de explotación sexual.
 - La violencia intrafamiliar y la violencia comunitaria por motivos de género.
 - El desconocimiento y vulneración de su derecho a la salud y especialmente de sus derechos sexuales y reproductivos a todo nivel, con particular gravedad en el caso de las niñas y adolescentes pero también de las mujeres gestantes y lactantes.
 - La asunción del rol de jefatura de hogar femenina sin las condiciones de subsistencia material mínimas requeridas por el principio de dignidad, con especiales complicaciones en casos de mujeres con niños pequeños, mujeres con problemas de salud, con discapacidad o adultas mayores.
 - Obstáculos agravados en el acceso al sistema educativo.
 - Obstáculos agravados en la inserción al sistema económico y en el acceso a oportunidades laborales y productivas.
 - La explotación doméstica y laboral, incluida la trata de personas con fines de explotación económica.
 - Obstáculos agravados en el acceso a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio hacia el futuro, especialmente en los planes de retorno y reubicación.
 - Los cuadros de discriminación social aguda de las mujeres indígenas y afrodescendientes desplazadas.
 - La violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por sus labores de promoción social, cívica o de los derechos humanos.
 - La discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos, con impacto especial sobre su derecho a la participación.
 - El desconocimiento frontal de sus derechos como víctimas del conflicto armado a la justicia, la verdad, la reparación y la garantía de no repetición.

Aunado esto, en lo que toca con los problemas específicos de las mujeres desplazadas, producto de la conjunción de los factores de vulnerabilidad que soportan, y que no afectan ni a las mujeres no desplazadas, ni a los hombres desplazados, distinguió:

- Los especiales requerimientos de atención y acompañamiento psicosocial de las mujeres desplazadas.
- Problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la población desplazada, así como ante el proceso de caracterización.
- Problemas específicos de las mujeres ante el sistema oficial de registro de la población desplazada, así como ante el proceso de caracterización.
- Una alta frecuencia de funcionarios no capacitados para atender a las mujeres desplazadas, o abiertamente hostiles e insensibles a su situación.
- El enfoque a menudo “familista” del sistema de atención a la población desplazada, que descuida la atención de un altísimo número de mujeres desplazadas que no son cabezas de familia.
- La reticencia estructural del sistema de atención a otorgar la prórroga de la Atención Humanitaria de Emergencia a las mujeres que llenan las condiciones para recibirla.

Para mejor ilustración del Auto aludido observemos los siguientes cuadros, tomados del Análisis del Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional desde la perspectiva de género, elaborado por Diana Fernanda Bermeo Mantilla (páginas 162 y 163):

AUTO 092 DE 2008



PATRONES DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACION DE GÉNERO

7. La violencia y abuso sexual, incluida la prostitución y la esclavitud sexual o trata de personas.
8. La violencia intrafamiliar y comunitaria por motivos de género.
9. El desconocimiento y vulneración del derecho a la salud y de sus derechos sexuales y reproductivos.
10. La asunción del rol de jefatura del hogar femenina sin las condiciones de subsistencia material mínimas.
11. Obstáculos en el acceso a la educación.
12. Obstáculos en la inserción al sistema económico y laboral
13. Explotación doméstica y laboral.
14. Obstáculos en el acceso a la propiedad de la tierra y protección del patrimonio.
15. Cuadros de discriminación social de las mujeres indígenas y afrodescendientes desplazadas.
16. Violencia contra las mujeres líderes o que adquieren visibilidad pública por labores de promoción social.
17. Discriminación en su inserción a espacios públicos y políticos.
18. Desconocimiento de sus derechos, como víctimas del conflicto armado, a la justicia, reparación y la garantía.

MEDIDAS COMPREHENSIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO SEGÚN EL AUTO 092 DE 2008

1. Comunicado al Fiscal General de la Nación de 183 crímenes sexuales cometidos en el marco del conflicto armado interno colombiano.
2. Orden de creación de trece programas específicos para colmar los vacíos existentes en la política pública para la atención del desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, de manera que se contrarresten efectivamente los diez riesgos de género y las 18 facetas de género.
3. Adopción de órdenes individuales de protección concreta para 600 mujeres desplazadas.
4. Establecimiento de las dos presunciones constitucionales a favor de las mujeres desplazadas.

LOS 13 PROGRAMAS ORDENADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN EL AUTO 092 DE 2008

1. Programa de Prevención del Impacto de Género Desproporcionado del Desplazamiento, mediante la Prevención de los Riesgos Extraordinarios de Género en el marco del conflicto armado.
2. Programa de Prevención de la Violencia Sexual contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas
3. Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Comunitaria contra la Mujer Desplazada y de Atención Integral a sus Víctimas
4. Programa de Apoyo a las Mujeres Desplazadas que son Jefes de Hogar, de Facilitación del Acceso a Oportunidades Laborales y Productivas y de Prevención de la Explotación Doméstica y Laboral de la Mujer Desplazada
5. Programa de Promoción de la Salud de las Mujeres Desplazadas
6. Programa de Apoyo Educativo para las Mujeres Desplazadas Mayores de 15 Años.
7. Programa de Facilitación del Acceso a la Propiedad de la Tierra por las Mujeres Desplazadas
8. Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas
9. Programa de Protección de los Derechos de las Mujeres Afrodescendientes Desplazadas
10. Programa de Promoción de la Participación de la Mujer Desplazada y de Prevención de la Violencia contra las Mujeres Líderes o que adquieren Visibilidad Pública por sus Labores de Promoción Social, Cívica o de los Derechos Humanos
11. Programa de Garantía de los Derechos de las Mujeres Desplazadas como Víctimas del Conflicto Armado a la Justicia, la Verdad, la Reparación y la No Repetición
12. Programa de Acompañamiento Psicosocial para Mujeres Desplazadas
13. Programa de Eliminación de las Barreras de Acceso al Sistema de Protección por las Mujeres desplazadas.

Es así, como en el Auto 092 de 2008 y otros emitidos durante estos años, la Corte Constitucional exige al Estado una política pública diferencial concreta para la población desplazada, desde el marco de los derechos humanos de las mujeres. De esta forma, llenó de un significado jurídico específico el enfoque diferencial de género. Por tanto, puede considerarse un hito en la historia jurídica colombiana respecto a los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento, porque insta al gobierno a cumplir sus deberes constitucionales, respecto a esta población, los cuales son conculcados continuamente; desconociendo instrumentos internacionales obligatorios para Colombia como la CEDAW (recogida en la Ley 51 de 1981, Ley 984 de 2005), la Convención Interamericana Belém do Pará (recogida en la Ley 248 de 1995), el Estatuto de Roma de la Corte Penal (incorporada en la Ley 742 de 2002) y la incorporación de la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad sobre "Mujer, paz y seguridad".⁴¹

Además, implicó una coadyuvancia hacia la materialización del reconocimiento de las mujeres con derechos políticos, víctimas y sujetos de derechos; de las prácticas de violencia sistemática contra las mujeres en el marco del conflicto armado y de la validación de la importancia de la democracia y los mecanismos de control y división del poder.⁴²

Sin embargo, posterior a dicho auto la Corte se pronunció a través del Auto 237 de 2008, frente al vencimiento de términos y al incumplimiento de las órdenes impartidas en el Auto 092 al valorar la propuesta presentada por el gobierno a través de Acción Social en un informe de avance del diseño de la Estrategia Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales de las

⁴¹ BERMEO MANTILLA, Diana Fernanda. Análisis del auto 092 de 2008 de la corte constitucional desde la perspectiva de género. p. 165.

⁴² *Ibidem* p. 166.

Mujeres en Riesgo o en Situación de Desplazamiento. Constató la Corte que las órdenes respecto de la creación de los programas no sólo fueron incumplidas sino que “el Director de Acción Social ni siquiera dio oportunidad de iniciar el proceso participativo que se indicó expresamente en el Auto 092 de 2008 [...]”. Éste era uno de los elementos mínimos obligatorios con los que habían de cumplir los programas”.⁴³ En consecuencia, el Auto 237 de 2008 define el día 20 de noviembre del mismo año como plazo máximo para la entrega del documento con el diseño de los programas solicitados por la Corte, el cual debe, por un lado, cumplir con cada uno de los elementos mínimos necesarios y dar cuenta, además, de la adopción de los lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección del Impacto Desproporcionado y Diferencial del Desplazamiento Forzado sobre las Mujeres Colombianas, documento construido por las organizaciones de mujeres desplazadas y mujeres defensoras de derechos humanos⁴⁴, en atención a lo ordenado por la Corte en Auto 092 de 2008.⁴⁵

Adicionalmente, la Corte desestimó las razones de índole jurídica, presupuestal y administrativa, invocadas por Acción Social en el informe remitido para no dar cumplimiento a la orden de creación de dichos programas. Así mismo, consideró improcedente la alusión a los programas existentes en la estructura de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención Integral de población Desplazada - SNAIPD⁴⁶, dado que esta oferta institucional no responde

⁴³ Corte Constitucional de Colombia Auto 237 de 2008.

⁴⁴ Las organizaciones que elaboraron el documento entregado a la Corte Constitucional fueron: Afrodes, Coordinación Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, Casa Mujer, Cladem, Codhes, Coordinación Nacional de Desplazados (sección mujeres), Corporación Sisma Mujer, entre otras.

⁴⁵ *Ibidem*. Op. Cita 32 p. 167.

⁴⁶ SNAIPD, Sistema Nacional de Atención Integral de población Desplazada integrado por 27 Entidades: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Vicepresidencia de la República - PDDHH Y DIH, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, Ministerio de Comunicaciones, Departamento Nacional de Planeación, Defensoría del Pueblo, Servicio Educativo Nacional - Sena, Fonvivienda, Comisión Nacional de Televisión, Instituto Colombiano de

de manera efectiva a la prevención y atención de los riesgos de género del conflicto armado y del desplazamiento. En consecuencia, la Corte definió un nuevo cronograma y, ordenó al Director de Acción Social dar cumplimiento estricto a las resoluciones impartidas en el Auto 092 de 2008 referentes a la creación de programas nuevos; adoptar total e integralmente los lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección del Impacto Desproporcionado y Diferencial del Desplazamiento Forzado sobre las Mujeres Colombianas.

Otros autos posteriores, se refieren de igual forma, al tema del enfoque diferencial de género sobre las mujeres víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado, como son: 1. Enfoque diferencial: Auto 004 (sobre indígenas), Auto 005 (respecto de los afrodescendientes) y Auto 006 (sobre discapacitados); 2. Obligaciones territoriales: Auto 007 de 2009; 3. Seguimiento al estado de cosas inconstitucional: Auto 008 de 2009; 4. Justicia frente a delitos de Violencia Sexual: Auto 036 de 2009; 5. El Auto 007 de 2009 establece la coordinación de la política pública de atención a la población desplazada con las entidades territoriales; 6. El Auto 008 de 2009 establece la persistencia del estado de cosas inconstitucionales; 7. Auto 266 de 2009, el cual fue una rendición de cuentas de Acción Social ante la Corte Constitucional sobre el presente auto, profundiza respecto a la protección de derechos de las mujeres víctimas del conflicto armado interno y el desplazamiento forzado. De igual forma, cuestiona la posición que han tomado varias instituciones, tanto públicas como privadas, en lo relativo al incumplimiento e inobservancia de las órdenes impartidas por la Corte

Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos autos de cumplimiento.⁴⁷

La conquista de la protección y garantía de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual aún no ha terminado, puesto que la Plenaria de la Cámara de Representantes surtió el martes dos (2) de junio del año que discurre, el último debate del proyecto de ley que tipifica al “feminicidio” como delito autónomo e impone penas de hasta 50 años de cárcel para quienes atenten contra la vida de una mujer por motivos de género.⁴⁸

La Ley, también conocida con el nombre “Rosa Elvira Cely”, bautizada en honor al caso de una mujer en Bogotá brutalmente asesinada que causó gran conmoción nacional, también establece medidas de prevención y erradicación de dichas formas de violencia y adopta estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre con los principios de igualdad y no discriminación.⁴⁹

Esta iniciativa fue radicada por el senadora del Polo Democrático Gloria Ramírez, pero contó con el respaldo de la totalidad de las mujeres congresistas (32 representantes y 22 senadoras de todos los partidos) y en su último debate en plenaria se radicó con ponencia de María Fernanda Cabal del Centro Democrático.⁵⁰

La nueva ley, que fue aprobada con una votación de 91 votos contra 3, crea los delitos autónomos de feminicidio simple con penas de 20 años y ocho meses

⁴⁷ Ibídem. Óp. Cita 32 p. 169.

⁴⁸ Cámara de Representantes da vía libre en último debate a la Ley ‘Rosa Elvira Cely’, que endurece sanciones para asesinatos con antecedentes de violencia sexual, física o emocional. POR: JORGE LUIS CANTILLO. Página web: <http://www.elheraldo.co/nacional/aprobada-ley-rosa-elvira-cely-que-tipifica-el-delito-de-feminicidio-197725>.

⁴⁹ Ídem.

⁵⁰ Ídem.

a 41 años y seis meses; y de feminicidio agravado, con penas de 41 años y seis meses a 50 años, pena máxima permitida en Colombia. Estos nuevos delitos serán castigados más severamente que el homicidio simple (de 17 a 35 años) y homicidio agravado (de 33 a 50 años) por contar con el agravante de ser cometidos contra una mujer por motivos de género.⁵¹

A dicha norma le resta la conciliación entre las cámaras del Congreso y la sanción presidencial para ser Ley de la República.

⁵¹ Ídem.

3. ENTIDADES PARTICIPANTES

PRINCIPALES:

- UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
- FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA (FUNDEHUVICOL).

COADYUVANTES O SECUNDARIAS

ENTIDADES PARTICIPANTES	NOMBRES
Públicas	<p>Gobernación del Magdalena. Alcaldía Distrital de Santa Marta Defensoría del Pueblo. Comisarías de Familia. Pro familia. Caja de Compensación Familiar (Cajamag) Servicio Nacional de Aprendizaje Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral de población Desplazada; integrado por 27 Entidades: Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, Vicepresidencia de la República - PDDHH Y DIH, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural, Ministerio de Comunicaciones, Departamento Nacional de</p>

	Planeación, Defensoría del Pueblo, Servicio Educativo Nacional - Sena, Fonvivienda, Comisión Nacional de Televisión, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Banco Agrario, Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural - Incoder, Banco de Comercio Exterior de Colombia - Bancoldex, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses, Superintendencia de Notariado y Registro, Fiscalía General de la Nación, Finagro)
Privadas	Organizaciones de Víctimas, Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, Mesas de participación de Víctimas. ONG: Afrodes, Coordinación Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, Casa Mujer, Cladem, Codhes, Coordinación Nacional de Desplazados (sección mujeres), Corporación Sisma Mujer, entre otras. Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos MAPP-OEA. Pastoral Social

4. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

4.1. Breve síntesis del contexto de violencia en la ciudad de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico - D. T. C. H. – Colombia.

En la investigación que dio origen a la PRIMERA ENCUESTA DE PREVALENCIA "VIOLENCIA SEXUAL EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL CONTEXTO DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO", Colombia 2001 - 2010 en el marco de la campaña "Violaciones y otras violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra" impulsada por la confederación internacional de organizaciones no gubernamentales Oxfam con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda y llevada a cabo por la ONG colombiana Casa de la Mujer, mencionada con precedencia, se focalizó al Departamento del Magdalena como uno en los cuales se halló mayor índice de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Tal y como se evidencia en la siguiente tabla⁵²:

TABLA 1
Departamentos y municipios en los que se realizó la Encuesta ENVISE

Departamentos	Municipios	Departamentos	Municipios
Antioquia	Medellín	Putumayo	Orito
	Urrao	Huila	Rivera
	Apartadó	Caquetá	San Vicente del Caguán
Nariño	Francisco Pizarro	Córdoba	Montelibano
	Leiva	Magdalena	Salamina
	Pupiales	Meta	Castillo
Caldas	Aguadas	Cundinamarca	Bogotá D.C
Valle	Argelia		

Fuente: Encuesta ENVISE Colombia 2001-2009

⁵² Ibídem. Óp. Cita 9 p. 5.

Como se observa, se tomó al Municipio Salamina como objeto de la investigación.

Aunado ello, conforme lo manifiesta el Observatorio Nacional de Paz en su documento DINAMICAS RECIENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, históricamente en ésta zona desde los ochenta, han estado presentes los Frentes 19 y 37 de las FARC, y los Frentes Francisco Javier Castaño y Domingo Barrios del ELN; por múltiples factores, entre ellos la violenta ofensiva de hace unos años por parte de las autodefensas y actualmente la presión de las fuerzas armadas estos grupos se han visto obligados a realizar un repliegue táctico hacia las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta⁵³.

En el mismo documento, se narra que tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC - que operaban en el Departamento, han aparecido Grupos Armados Insurgentes – GAI⁵⁴ - conformados por excombatientes de las AUC que no ingresaron al proceso de justicia y paz, reinsertados que volvieron a tomar las armas y delincuentes comunes, quienes se organizaron en grupos al margen de la ley autodenominados Águilas Negras, Los Nevados, Los Paisas, Escuadrón Mano Negra, Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Urabeños. Estos grupos además de trabajar al servicio de los narcotraficantes de la región, extorsionan a comerciantes y ganaderos, asesinan líderes, amenazan grupos de población, reclutan desmovilizados y jóvenes, patrullan, prestan servicios de seguridad e intimidan a los habitantes de las zonas en que ejercen sus actividades.⁵⁵

⁵³ Observatorio Nacional de Paz. Documentos mensuales de análisis y divulgación sobre conflictos, Región Norte. DINAMICAS RECIENTES DEL CONFLICTO ARMADO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. Página web: www.observapaz.org/index.php?option=com_docman&task...

⁵⁴ Ídem. No obstante, dentro del contexto tratado, inferimos que la sigla GAI hace referencia a los Grupos Armados Insurgentes. Esto debido a que en el documento citado no se aclara de manera precisa el significado de dicho acrónimo.

⁵⁵ Ídem.

Las actividades delictivas de las llamadas “GAI” abarcan un amplio espectro: negocios de narcotráfico, robo de hidrocarburos, extorsiones, homicidios, cuidado de propiedades usurpadas a campesinos desplazados, amenazas, “limpieza social”, reclutamiento forzado, masacres, obligación de pagar por “prestación de servicios de protección personal y patrimonial” entre otras. Hay autoridades gubernamentales que consideran a estos grupos armados ilegales, simples bandas delincuenciales, a pesar de que es notorio el carácter político que ostentan, pues pretenden regular la vida social y económica de las zonas en que operan mediante acciones entre las que se cuentan: el desplazamiento de poblaciones⁵⁶, ataques a quienes consideran auxiliadores de la subversión, agresiones a aquellos que denuncian violaciones a los derechos humanos⁵⁷, amenazas a desplazados que pretenden retornar y recuperar sus tierras, y múltiples actos de intimidación, tal como lo anota el Defensor delegado para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto.⁵⁸

4.2. Características geopolíticas de Santa Marta D. T. C. H.

Aunado lo expuesto, es menester destacar que Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico – D. T. C. H. -, capital del Departamento del Magdalena, está ubicada al norte de Colombia, a orillas de una gran bahía del Mar Caribe, es la ciudad más antigua de Colombia, dado que fue fundada por Rodrigo de Bastidas el 29 de julio de 1525 y se caracteriza por seguir teniendo vivas sus tradiciones, como el carnaval, las fiestas del Mar y el respeto por las tradiciones religiosas.

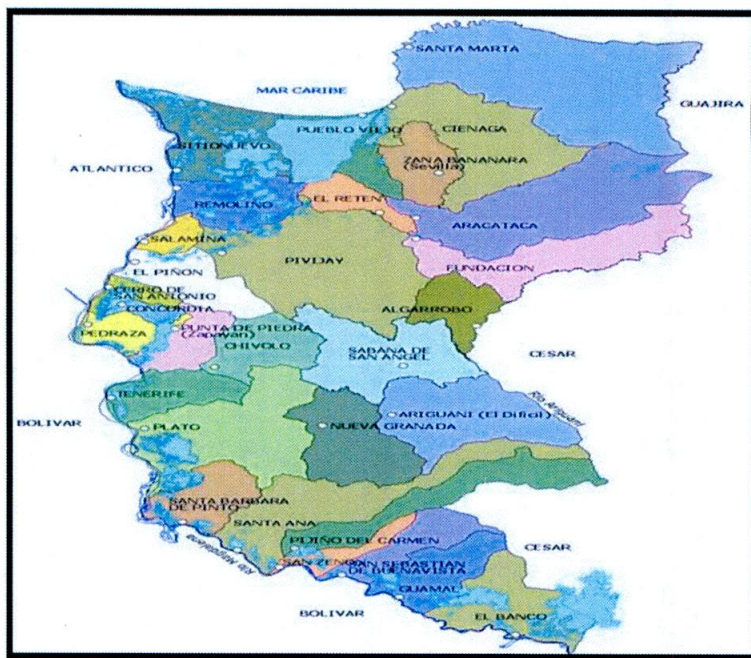
⁵⁶ Decimosegundo informe de la MAPP-OEA del 9 de febrero de 2.009.

⁵⁷ Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fechado el 4 de marzo de 2010.

⁵⁸ *Ibidem*. Óp. cita 53.

Además, Santa Marta tiene una extensión total: 2,393.35 Km² (área urbana: 55.10 Km² y área rural: 2,338.25 Km²); comprendida entre los siguientes Límites: Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los Municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar.⁵⁹

De acuerdo al censo general realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE- (2005), el Distrito de Santa Marta tiene una población de 454.860



habitantes. Sin embargo, en 2011, la Dirección Nacional de Planeación, arrojó que Santa Marta tiene una población aproximada a los 470000 habitantes.

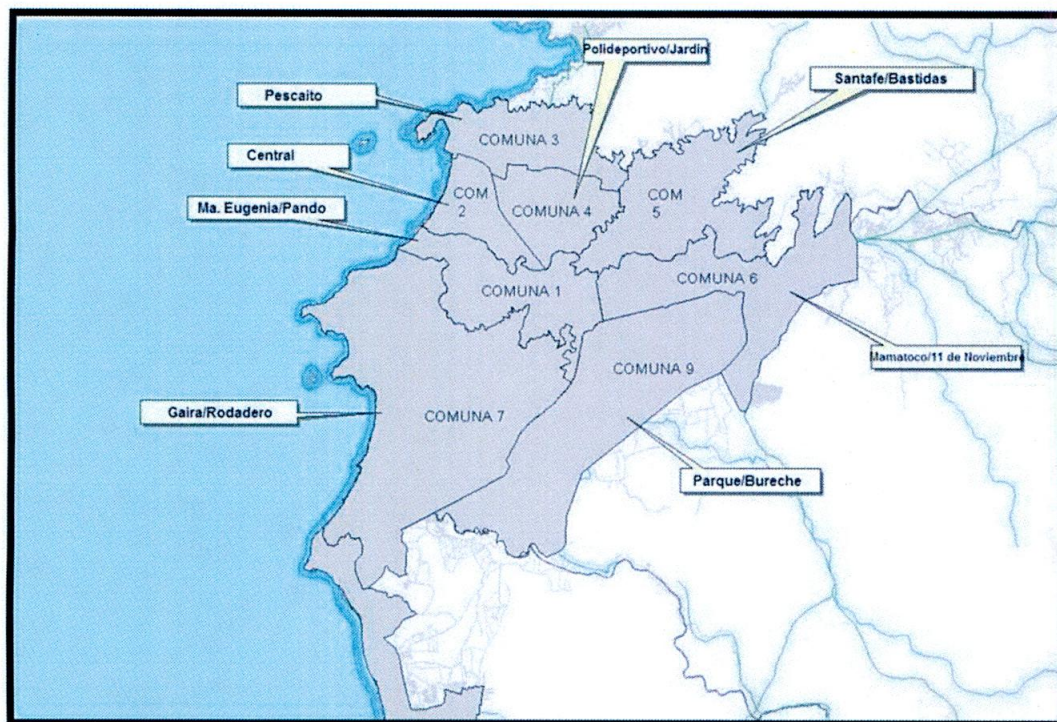
El Distrito de Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos del país, por su estratégica ubicación entre la Sierra Nevada de su mismo nombre y el Mar Caribe; se conforma por un mar territorial, un área montañosa, cuerpos de agua internos, islas y bahías, una zona costera y una zona continental. Su

⁵⁹ Tabla No.: Mapa de división geopolítica de Santa Marta D. T. C. H. Fuente: Página web: https://www.google.com.co/search?q=santa+marta&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IThxVaOaLcL1ggTcmoDQCQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAg#tbm=isch&q=santa+marta+mapa&imgc=Q_fcCvmr7eqKvM%253A%3B1wSrivXldrUK3M%3Bhttp%253A%252F%252Fmagdalena.gov.co%252Fapc-aa-files%252F36613630393530666230323939333262%252Fmapa_magdalena_5.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.magdalena.gov.co%252Fmapas_municipio.shtml%253Fapc%253Dbcexx-1-%2526x%253D1364286%3B596%3B903

economía se centra principalmente en el turismo, y en otras actividades, tales como el comercio, la actividad portuaria, la pesca y la agricultura, en los que se destaca la producción de banano, café, cacao, frutales y yuca.

Administrativamente, el Distrito de Santa Marta cuenta con la siguiente división:

ÁREA URBANA Compuesta por nueve comunas (180 barrios)	ÁREA RURAL Integrada por corregimientos y asentamientos urbanos tales como:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Comuna Central 2. Gaira – Rodadero 3. Mamatoco – 11 de Noviembre 4. María Eugenia – Pando 5. Parque – Bureche 6. Pescaito – Almendro – Juan XXIII 7. Polideportivo – El Jardín 8. Pozos Colorados – Don Jaca 9. Santa Fe – Bastidas 	<ul style="list-style-type: none"> • Bonda (Corregimiento) • Buritaca (Ciudad Perdida o <i>Teyuna</i>) (Caserío) • Cabañas de Buritaca (Caserío) • Calabazo (Caserío) • Cañaveral (Agua Fría) (Caserío) • Colinas de Calabazo (Caserío) • Curvalito (Caserío) • El Trompo • Guachaca (Corregimiento) • Guacoche (Caserío) • La Aguacatera • La Olla • La Planta • La Revuelta • Las Colinas • Machete Pelao • Marquetalia (Caserío) • México • Minca (Corregimiento) • Paz del Caribe (Caserío) • Playa Blanca • Perico Aguao (Caserío) • Taganga (Corregimiento) • Tigrera (Caserío) • Valle de Gaira



4.3. Razón de la población objetivo.

El presente proyecto tiene como población objetivo las mujeres víctimas de violencia sexual posiblemente vinculadas o integrantes⁶⁰ de la Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Colombiana (FUNDEHUVICOL), ubicada al oriente de la ciudad y cuya sede se encuentra en la en el barrio Ciudad Equidad, en la Manzana 4, Casa 301, ubicado en el kilómetro 14 vía sobre la vía que conduce desde Santa Marta hacia el corregimiento de Minca, específicamente las mujeres se encuentra focalizada en los barrios Irotama, Ciudad Equidad, Divino Niño II y Ondas del Caribe.

⁶⁰ La mayoría de las mujeres víctimas de violencia sexual que son parte activa de FUNDEHUVICOL.

5. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Muchas mujeres víctimas de violencia sexual dentro del conflicto tuvieron que abandonar sus viviendas y desplazarse a otras ciudades para salvaguardar su vida y lo que quedaba de su integridad personal. Provenientes de varios municipios de Magdalena, del Cesa y La Guajira, se asentaron en los barrios Irotama, Ciudad Equidad, Divino Niño II y Ondas del Caribe. Muchas de ellas hacen parte de la Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en Colombia (Fundehuvicol), en las que se determinó, de acuerdo a unos acercamientos iniciales, una serie de vulneraciones que persisten de sus derechos humanos, luego de su lejanía del conflicto y en medio del marco de la justicia transicional, lo cual en cierto modo, se constituye en una especie de revictimización.

El reconocimiento de la calidad de víctima, les otorga una condición de especial observancia y protección por parte de las entidades estatales. La problemática de vulneración se configura concretamente en la falta de educación y capacitación, pocas o nulas oportunidades de empleo y deficiente atención en la prestación del servicio de salud, necesidad de vivienda.

Las medidas establecidas por el Estado resultan insuficientes a la hora de atender toda la problemática vinculante y subyacente del conflicto armado, lo cual ha generado desilusión en las mujeres frente a la atención que se les debe proveer.

Otra problemática evidenciada se relaciona con la necesidad de visualizar su historia, sus necesidades, para la construcción de la memoria del país, en la

búsqueda de la no repetición. “*Aquel que no conoce su historia, está condenado a repetirla*”⁶¹. Lograr además, la verdadera y material restitución de los derechos; esto se debe a que la mayoría de las víctimas son mujeres indígenas o afrodescendientes, que viven en situación de pobreza extrema, y no cuentan con una instrucción básica iniciar la ruta de atención.

Es por eso que la intervención a este colectivo perseguirá el objetivo de garantizar la promoción y protección social, como herramienta para superar su estado de vulnerabilidad, en coadyuvancia y complementariedad del deber del Estado, que ha resultado deficiente y tardío para satisfacer todas las necesidades.

5.1 Identificación de los derechos vulnerados

Establecemos una lista de los derechos vulnerados a las mujeres víctimas con ocasión del conflicto y durante su proceso de reconciliación y adaptación a la sociedad.

- **Derecho a la dignidad y la libertad:** En palabras del filósofo E. Kant, la dignidad es un *valor absoluto*, que encara el respeto irrestricto por cada vida en particular, y es condición inherente a la condición humana. Ahora, en el escenario del conflicto la vulneración de estos derechos, se traduce precisamente en la discriminación y exclusión a la que son sometidas, en la falta o deficiente atención en la prestación del servicio de salud, de oportunidades laborales, en la dificultad en la locomoción. La dignidad de estas mujeres, se afecta ante la inoperancia y la negligencia del Estado para asistirle en la superación de su situación.

⁶¹ Napoleón Bonaparte.

-
- **Derecho a la vida e integridad personal:** En este grupo de mujeres encontramos muchas con afectación de su salud mental, lo cual les impide tener una vida sana y productiva. Además es vulnerada por el sistema de salud ya que no se ha dado el enfoque diferencial que ha sido reiterado en varias ocasiones por la Corte Constitucional, y no cuentan con las herramientas jurídicas para hacer valer sus derechos.
 - **Derecho al honor, la privacidad y la intimidad:** Dentro de la organización de mujeres víctima de violencia sexual a las cuales nos hemos venido refiriendo, encontramos mujeres que sienten miedo de enfrentar los problemas que se presentan en su diario vivir, ya que su honor se encuentra manchado y así mismo esto ha desencadenado muchos temores en su vida íntima con su pareja, debido al recuerdo del hecho victimizante y ha traído como consecuencia problemas emocionales, de orden económico, social y familiar, debido a las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentra en este momento.
 - **Derecho a la igualdad y no discriminación:** Se vulnera este derecho a las mujeres víctimas de violencia sexual, ya que las instituciones del Estado tienen la obligación de brindar una atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible y de calidad.
 - **Derecho al trabajo:** Este derecho se está vulnerando debido a que las mujeres víctimas de violencia sexual que se van intervenir, no cuentan con una estabilidad económica porque muchas de ellas no tienen la oportunidad de tener un trabajo en condiciones dignas, siendo obligación del Estado implementar una política pública encaminada al goce efectivo de este derecho.

- **Educación con formación de integralidad:** Respecto a esta vulneración encontramos mujeres que tienen la necesidad de terminar sus estudios de bachillerato e ingresar a la educación superior, con el propósito de mejorar la condición de vida de ellas y de su núcleo familiar, pero no tienen los medios necesarios para poder hacerlo, ya que muchas de ellas son madres cabeza de familia y más bien deben trabajar para poder mantener su hogar.

- **Derecho a la Atención de la salud y el saneamiento Ambiental:** Dentro de nuestra intervención social en la organización de mujeres víctimas de violencia sexual, hemos palpado que a éstas se les vulnera este derecho, partiendo de la atención que les brindan las entidades prestadoras de salud, ya que por sus condiciones, deben ser remitidas al siquiatra y muchas tienen dificultades para conseguir las citas médicas y cuando la consiguen y son atendidas, la dificultad consiste en obtener los medicamentos formulados por el médico especialista, ya que éstos medicamentos se encuentran por fuera del POS y no son suministradas por dichas entidades prestadora de salud, quedando desprotegidas por el hecho de no tener los recursos económicos para comprarlas para su tratamiento, quedando así insatisfecho su derecho a la salud.

Adicionalmente, es pertinente aclarar que dentro del decálogo de los derechos humanos trasgredidos a la mujer víctima de violencia sexual, deben incluirse todos los derechos enunciados en las normas descritas en el acápite del marco jurídico del presente proyecto, sumado a todas las normas sobre el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, a saber: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo; El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos

Facultativos; La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo; La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo; La Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos facultativos; La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; La Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; y La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo.

Más aún, los derechos contenidos en las normas del Derecho Internacional Humanitario: El Reglamento de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre; El Primer Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña; El Segundo Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar; El Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra; El Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra; El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I); El Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II); La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción; La Convención sobre Municiones en Racimo; La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción; La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de

armas químicas y sobre su destrucción; La Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados; y El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares.

Corolario a lo esbozado, en palabras plasmadas en el texto PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS, elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas:

“Hoy en día, un número cada vez mayor de normas del derecho internacional humanitario, en particular las garantías fundamentales de las personas en poder de una parte en conflicto y las normas del derecho internacional humanitario en los conflictos armados de índole no internacional, se formulan en términos de derechos subjetivos. Ejemplo de ello son el derecho a recibir asistencia individual o colectiva que tienen las personas cuya libertad se ha limitado, o el derecho de las familias a conocer la suerte de sus familiares. A la inversa, los derechos subjetivos han sido plasmados por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones en normas de conducta para los funcionarios del Estado. Por ejemplo, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente en 1990, ofrecen una interpretación autorizada de los principios que deben respetar las autoridades cuando emplean la fuerza a fin de no atentar contra el derecho a la vida.”⁶²

Lo anterior, de acuerdo a la interpretación y aplicación del bloque de constitucionalidad contenido en el artículo 93 de la Constitución Política de Colombia de 1991.

5.2. Identificación de los sujetos de derechos.

⁶² PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DURANTE LOS CONFLICTOS ARMADOS. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. New York y Ginebra 2011 p. 16.

La Fundación de los Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en Colombia -FUNDEHIVICOL-, asocia a mujeres que fueron víctima de violencia sexual en el conflicto armado. Agrupando alrededor de seiscientas (600) personas, de las cuales, se escogerán cien (100) de ellas para la ejecución del presente proyecto, de acuerdo a los resultados del proceso de caracterización y priorización de las necesidades.

5.3 Identificación de los sujetos de deberes u obligaciones.

Conforme lo señaló de manera expresa la honorable Corte Constitucional en el mentado Auto 092 de 2008, las obligaciones constitucionales del Estado colombiano relativas a la protección de la mujer frente a todo tipo de violencia y discriminación son claras y múltiples:-

SNAIPD (Sistema Nacional de Atención Integral de población Desplazada) integrado por 27 Entidades:

- Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional;
- Vicepresidencia de la República - PDDHH Y DIH;
- Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial;
- Ministerio de Educación Nacional;
- Ministerio del Interior y de Justicia;
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público;
- Ministerio de Defensa Nacional;
- Ministerio de Agricultura Desarrollo Rural;
- Ministerio de Comunicaciones;
- Departamento Nacional de Planeación;

- Defensoría del Pueblo;
- Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena-;
- Fonvivienda;
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar;
- Banco Agrario;
- Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural – Incoder-;
- Banco de Comercio Exterior de Colombia – Bancoldex-;
- Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer;
- Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación;
- Registraduría Nacional del Estado Civil;
- Instituto Nacional Medicina Legal y Ciencias Forenses;
- Superintendencia de Notariado y Registrado;
- Fiscalía General de la Nación;
- Finagro.

Consecuencias Jurídicas.

Más que una afectación en el ámbito jurídico o legal, la violencia sexual contra las mujeres genera consecuencias jurídicas, que se traducen inicialmente en la presentación de denuncias de carácter penal, para la verificación de la configuración de delitos y la sanción de sus responsables directos; y de peticiones de tipo administrativo, encaminadas a la asistencia y atención, una vez se haya adquirido la calidad de víctimas.

Toda persona que se haya visto afectada por causa de un daño, se ve compelida a iniciar trámites y diligencias, que implican la activación, en algunos casos, de los aparatos judiciales y en otros administrativos, los cuales, en la mayoría de las ocasiones, no se direccionan de manera eficaz, o no se reclaman

en debida forma. Aunado al escaso conocimiento que tienen sobre los mecanismos para petitionar o ejercer sus derechos; verbigracia, las mujeres víctimas requiere asistencia para reclamar su atención humanitaria de transición y la indemnización administrativa, asistencia a las audiencias públicas a la cual debe de asistir ya que se encuentra en proceso. De igual forma, es ampliamente conocido que la prestación del servicio de salud en Colombia, es un adefesio, un sistema perverso, feo y cojo, que no atiende las necesidades de las personas y de la comunidad; que se convierte en un sistema de salud rogado, ante lo cual se pretende ofrecer la ilustración de las herramientas legales y administrativas para su protección, estableciendo la ruta de atención de las entidades estatales que deben prestarla.

En términos generales, en el ámbito jurídico, se promocionará y promoverá la cátedra de derechos humanos para la defensa de derechos de las víctimas del conflicto, con énfasis en la reconciliación social y en la multiplicación de valores, con el objeto de generar una cultura de paz, respeto y perdón, para que desde el seno de las familias que integran las mujeres víctimas se erradiquen los factores de resentimiento y venganza que hacen del conflicto un círculo vicioso.

6. POBLACIÓN OBJETIVO Y ANÁLISIS DE PARTICIPACIÓN

La dinámica del conflicto armado en Colombia ha variado con el tiempo, ya que la violencia sexual ejercida sobre las mujeres ha sido constante y no solo ha producido efectos colaterales o expresiones de acción aislada, sino que ha sido utilizada como parte de una estrategia de la guerra, para cumplir objetivos militares de uno y otro actor armado y para demostrar supremacía.

Se ha establecido que la violencia sexual en el conflicto armado se comente en cuatro tipos de contexto: de ataque, control territorial, de privación de la libertad y de entre fila, y dentro de estos contextos, la violencia contra las mujeres ha obtenido unos fines para la guerra, tales como regular, callar, silenciar, dominar, humillar, castigar, recompensar, obtener información, expropiar, exterminar y cohesionar.

Con el ánimo de contribuir al resarcimiento de las nefastas consecuencias que origina la violencia sexual contra la mujer, en la ciudad de Santa Marta, existe la Fundación de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en Colombia (FUNDEHUVICOL) – en adelante la Fundación -, fue creada en el año 2002 por una mujer



Fuente. Página URL:

<http://biblioteca.soytic.gov.co/es/consulta/tecnologias-para-las-comunidades-vulnerables-maria-choles>

María Choles Toro: Víctima de violencia sexual, en Magdalena, por parte de múltiples actores armados. Miembro de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz y delegada ante la Mesa Nacional de Víctimas por el crimen de violencia sexual. (Ibíd. 63)

víctima de violencia sexual, MARIA CHOLE TORO⁶³, con el objetivo de brindarle apoyo a las mujeres que vivieron su mismo drama, así como a sus núcleos familiares, brindándole la orientación necesaria que le permita hacer efectivo sus derechos ante el Estado y con el fin de obtener justicia y reparación integral.

Su personalidad la ha caracterizado como una mujer líder y activa dentro de la organización que fundó y el año pasado tuvo la oportunidad de asistir a La Habana - Cuba a la mesa de negociación con los representantes de las FARC, con el ánimo de hacer sus aportes al proceso que busca obtener de manera definitiva la paz en Colombia.

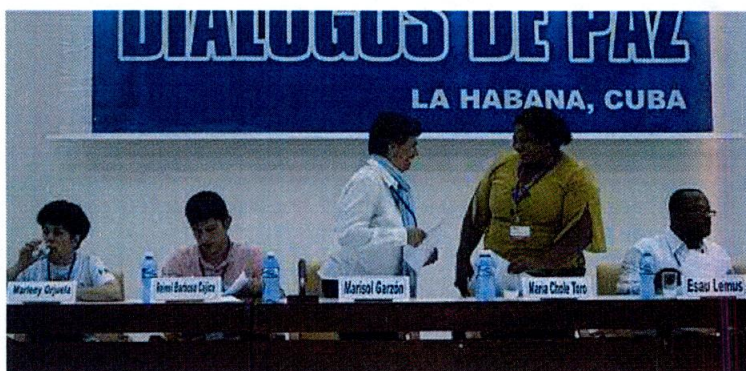


Foto: Eliana Aponte / EL TIEMPO. Justicia, pero no venganza, pidieron víctimas en Cuba. Página URL: <http://m.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/justicia-pero-no-venganza-pidieron-victimas-en-cuba/14516901>

Gracias a su participación recibió por parte de los Embajadores de Francia y de Alemania, el premio Franco Alemán de Derechos Humanos “Antonio Nariño 2014”, lo cual la motivó e impulsó a seguir luchando con más ahínco por su fundación así como a compartir su experiencia con otras organizaciones similares que existen en la ciudad de Santa Marta.

La Fundación cuenta actualmente con 600 mujeres, de las cuales aproximadamente un 80% fueron víctimas de violencia sexual. Sus edades oscilan entre los 25 y 60 años y vinieron desplazadas de los distintos municipios del Departamento del Magdalena. Actualmente viven con sus familias en distintos

⁶³ Las 12 víctimas escogidas para hablar en La Habana. Revista Semana. Nación. Página web: <http://www.semana.com/nacion/articulo/segundo-grupo-de-victimas-que-viaja-la-habana/402150-3>

barrios de Santa Marta, tales como Ciudad Equidad, Irotama, Ondas del Caribe, Divino Niño II y San Jorge.

Muchas de ellas perdieron a sus esposos por culpa del conflicto armado en Colombia, por lo que debieron asumir su rol de mujeres Cabeza de Hogar y a pesar de estar capacitadas para desempeñar un oficio, actualmente un gran número de ellas (75 %) se encuentra desempleada y les toca trabajar en oficios informales, tales como venta de minutos, de fritos, empleadas domésticas, etc.; con el fin de mantener su núcleo familiar.

La mayoría de las mujeres víctimas de violencia sexual de ésta organización aún no han superado el evento traumático dentro de su entorno familiar, debido a que su comportamiento se encuentra alterado, al punto que en muchas ocasiones manifiestan haber tenido pesadillas con el hecho victimizante, generándoles ansiedad, tristeza, vergüenza, impotencia, inseguridad, enojo, culpa, baja autoestima y trastornos en la sexualidad con sus parejas actuales. La estrategia a seguir para ellas sería prestarle asistencia psicológica con el objetivo de ayudarles a mitigar las secuelas producto del abuso sexual del que fueron víctimas por los integrantes de los grupos al margen de la ley.

7. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA Y RESULTADOS ESPERADOS

7.1. Objetivo general

Contribuir al restablecimiento y respeto de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno de los barrios Irotama, Ondas del Caribe, La equidad y Divino Niño II de la ciudad de Santa Marta, asociadas a la Fundación de los Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en Colombia –FUNDEHIVICOL-.

7.2. Objetivos específicos:

1. Brindar acompañamiento jurídico, con base en las rutas de apoyo institucional preestablecidas, a la Fundación de los Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia en Colombia –FUNDEHIVICOL- y a las mujeres asociadas a la Fundación que han sido víctima de violencia sexual en el conflicto armado, para que acudan a interponer las denuncias de los hechos victimizantes, a la reclamación de sus derechos y prestaciones de acuerdo a la oferta institucional.
2. Ofrecer servicios de apoyo psicosocial e la superación de los trastornos de estrés post traumático, y demás condiciones psicológicas generada por la experiencia del conflicto.

3. Promover, a través de la interacción con entidades educativas públicas y privadas, el acceso de la población objeto de estudios a programas de capacitación y emprendimiento.
4. Implementar mecanismos para lograr la sensibilización de las víctimas frente a la importancia de lograr el perdón y el olvido de los actos violentos que originaron su desgracia, en búsqueda del cumplimiento del principio fundante de la paz.

7.3. Resultados esperados.

7.3.1 Respecto del **primer objetivo específico**, obtendremos estos resultados:

Resultado 1: 90 mujeres de la FUNDEHUVICOL cuenten con capacitación e instrucción básica relacionadas con la reclamación de sus derechos ante las entidades estatales de todo orden y categoría para la satisfacción de sus derechos fundamentales.

Resultado 2: El fortalecimiento de la organización civil, a través de sus representantes, en la promoción de los derechos humanos, y en la utilización de los mecanismos legales de protección de los mismos.

7.3.2 Respecto del **segundo objetivo específico**, obtendremos estos resultados:

Resultado 1: 75 mujeres beneficiarias obtengan atención específica en el tratamiento del dolor y sus traumas, como herramienta para cambiar su realidad.

Resultado 2: La caracterización de las mujeres asociadas a las FUNDEHUVICOL permitirá ofrecer y direccionar las ayudas psicológicas y sociales frente a las entidades del Estado.

7.3.3 Resultados del **tercer objetivo específico**:

Resultado 1: 80 mujeres beneficiadas conocerán la ruta de apoyo institucional académico que les ofrezca oportunidades de superación personal para ingresar a la vida productiva en condiciones de competitividad.

Resultado 2: 70 mujeres obtendrán herramientas de auto ayuda y auto gestión para la producción de medios de subsistencia en condiciones de vida digna.

7.3.4 En cuanto al **cuarto objetivo específico**, obtendremos como resultados:

Resultado 1: 90 mujeres recibirán capacitación como multiplicadora y formadora en la promoción por el respeto a los Derechos Humanos, para mejorar la convivencia social, y conjurar una de las causas remotas de conflicto armado.

Resultado 2: 80 mujeres fortalecerán el proceso de reconciliación y perdón para la superación de los traumas que les afectan y fomentar un país sin rencores y sin violencia.

8. ESTRATEGIA DE EJECUCION

Para la ejecución del proyecto se distinguen tres canales de atención, a saber: jurídico, psicológico y social, para lo cual hemos elaborado unos protocolos que constituyen los métodos de atención al colectivo a intervenir y las actividades a realizar, de acuerdo a la interdisciplinariedad de los autores de esta propuesta. A través de las siguientes actividades, teniendo en cuenta que las cien (100) mujeres a capacitar, intervenir y formar, se dividirán en cuatro (4) grupos de 25:

8.1 PROCESO DE CARACTERIZACION.

La primera actividad a desarrollar es un proceso de caracterización que permita determinar las condiciones psicosociales de las mujeres para escogencia de las beneficiarias y a la priorización de las actividades.

Se desarrollará a través de entrevistas domiciliarias.

8.2 Talleres de capacitación.

8.2.1 Acompañamiento jurídico, se desarrollaran cuatro (4) talleres de formación y capacitación en temas de derechos humanos, derechos fundamentales, principios básicos constitucionales, mecanismos de protección de los derechos. Para ello, las mujeres beneficiarias se subdividirán en cuatro grupos de veinticinco personas.

8.2.2 Acompañamiento social, se desarrollaran cuatro (4) talleres de formación y capacitación en temas de emprendimiento y autogestión de recursos para la subsistencia en condiciones de dignidad, rutas para acceder a la ayuda institucional en materia de educación, salud, vivienda. Para ello, las mujeres beneficiarias se subdividirán en cuatro grupos de veinticinco personas.

8.3 Intervención psicológica.

8.3.1 Acompañamiento psicológico, se desarrollaran ocho (8) sesiones, de la siguiente manera: cuatro (4) sesiones de terapia grupal a los grupos de mujeres que se integren dependiendo de la intervención que requiera; y, cuatro (4) sesiones de terapia individual, teniendo en cuenta la priorización de las necesidades a intervenir.

8.4 Cierre conceptual.

Se realizará una reunión final con todas las mujeres beneficiarias en la cual se expondrán las conclusiones de las actividades que se desarrollaron, absolver dudas persistentes, definir seguimiento del acompañamiento y nombrar las formadoras de derechos.

8.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

No.	Resultado	No.	Actividades	DURACION
1	90 mujeres de la FUNDEHUVICOL cuenten con capacitación e instrucción básica relacionadas con la reclamación de sus derechos ante las entidades estatales de todo orden y categoría para la satisfacción de sus derechos fundamentales.	1	Diseño de formato de caracterización. Revisión y corrección del instrumento.	4 semanas
		2	Selección de participantes.	2 semanas
		3	Diseñar programa de intervención.	2 semanas
		4	Cuatro (4) Taller de formación en: principios y derechos constitucionales, derechos humanos, mecanismos de protección de derechos.	4 semanas
2	El fortalecimiento de la organización civil, a través de sus representantes, en la promoción de los derechos humanos, y en la utilización de los mecanismos legales de protección de los mismos.	1	Un Taller de formación a las y los representantes de la Fundación, en la promoción de los derechos humanos.	2 semanas
		2	Una campaña de socialización de los instrumentos internacionales y nacionales de protección.	1 semana
3	75 mujeres beneficiarias obtengan atención específica en el tratamiento del dolor y sus traumas, como herramienta para cambiar su realidad.	1	Seleccionando beneficiarias con base en el proceso de caracterización.	1 semana
		2	Diseño programa de intervención.	2 semanas
		3	Sesiones de terapias grupales e individuales	4 semanas
	La caracterización de las mujeres asociadas a	1	Selección de beneficiarias.	1 semana

4	las FUNDEHUVICOL permitirá ofrecer y direccionar las ayudas psicológicas y sociales frente a las entidades del Estado.	2	Diseño programa de intervención.	2 semanas
		3	Sesiones de terapias	4 semanas
5	80 mujeres beneficiadas conocerán la ruta de apoyo institucional académico que les ofrezca oportunidades de superación personal para ingresar a la vida productiva en condiciones de competitividad.	1	Proceso de caracterización para seleccionar beneficiarias.	3 semanas
		2	Campaña de socialización de la oferta institucional en programas de educación, capacitación y emprendimiento vocacional.	2 semanas
6	70 mujeres obtendrán herramientas de auto ayuda y auto gestión para la producción de medios de subsistencia en condiciones de vida digna.	1	Talleres de emprendimiento para formación de empresas.	1 semana
		2	Campaña de información sobre la ruta institucional de apoyo empresarial.	1 semana
7	90 mujeres recibirán capacitación como multiplicadora y formadora en la promoción por el respeto a los Derechos Humanos, para mejorar la convivencia social, y conjurar una de las causas remotas de conflicto armado.	1	Selección de beneficiarias.	1 semana
		2	Diseño programa de intervención	2 semanas
		3	Sesiones de terapias grupales e individuales sobre el manejo del dolor, la ira, la importancia del perdón.	4 semanas
	80 mujeres fortalecerán el proceso de	1	Diseño programa de intervención.	2 semana

8	reconciliación y perdón para la superación de los traumas que les afectan y fomentar un país sin rencores y sin violencia.	2	Sesiones de terapias grupales e individuales sobre el manejo del dolor, la ira, la importancia del perdón	4 semanas
---	--	---	---	-----------

8.3. Impactos a corto y mediano plazo

8.3.1. Cualitativos

Las mujeres beneficiadas con el proyecto tendrán la posibilidad de minimizar y controlar las causas o riesgos que vulneran sus derechos humanos, podrán conocer sus derechos y exigir así a las entidades responsables el deber de asistencia y atención. Ello permitirá promover una verdadera cultura de reparación y restitución de los derechos, promover además la igualdad, y el enfoque de género, en los casos que se requiera.

La Fundación podrá conocer las herramientas que como colectividad cuentan para la defensa de su derecho de asociación y en pro del cumplimiento de su objeto social; tendrá además la posibilidad de crear un órgano de bienestar social, encargado de velar por la aplicación de acciones de tipo legal y asistencial y hacer el respectivo seguimiento.

Las entidades estatales y privadas, y demás organismos de cooperación, tomarán conciencia sobre la necesidad de ofrecer y ejecutar las actividades, planes, leyes y demás normativa que implique el resarcimiento de los daños que sufren las víctimas del conflicto armado interno, para evitar futuras vulneraciones o revictimizaciones.

8.3.2. Cuantitativos

El impacto a nivel cuantitativo lo podemos medir por dos aspectos: el primero, el impacto a la Fundación, si bien sabemos que se considera una persona jurídica, legalmente constituida, no se puede negar el hecho que en ella se asocian varias personas persiguiendo un fin común, que los beneficie a todos por igual o, particularmente a alguien que más lo requiera.

En cuanto a las mujeres individualmente consideradas, un número de 100 estarán capacitadas para la defensa de sus derechos humanos; conocerán las rutas de atención para la asistencia de carácter humanitario; serán multiplicadoras de estos conocimientos para evitar futuras vulneraciones.

8.3.3. Viabilidad y sostenibilidad

El presente proyecto es viable, pues todas las circunstancias están dadas para el cumplimiento del objetivo. Se tiene claramente definida la población objeto de la propuesta, y de ellas se cuenta con total disposición para colaborar y de aprender sobre sus derechos.

En cuanto a la sostenibilidad, el acompañamiento psicosocial y jurídico a las mujeres víctima de violencia sexual en el conflicto armado, se instalará una oficina de bienestar que hará parte de la Fundación, la cual tendrá como función hacer seguimiento a los procesos y actividades que se instauren. Los miembros de esta oficina serán formadoras en procesos de protección, garantía y reclamación de derechos fundamentales.

De igual forma, se establecerán enlaces con las entidades públicas y privadas, las organizaciones civiles y de cooperación internacional, para que se

den en mayor grado la protección de los derechos requerida, y se minimice el impacto que genera la vulneración de sus derechos humanos.

8.3.4. Condicionantes y factores internos

Reconocemos que todo proyecto de intervención social requiere una serie de condiciones que hacen posible su cumplimiento y conseguir el objetivo pretendido, no obstante, al tratarse de la realidad, es preciso identificar o prever la existencia de factores que pueden entorpecer o dilatar ese camino, los cuales imponen cierta flexibilidad a la hora de abordar el objetivo. Entre esos factores o condicionantes, podemos destacar:

1. Que las mujeres víctimas no narren con suficiencia los hechos victimizantes o mientan al respecto.
2. Que las mujeres víctimas se rehúsen a recibir la atención que se le ofrece.
3. Que los entes públicos comprometidos en la atención y asistencia de la población víctima o desplazada no muestre interés o vocación de servicio para la superación del estado de vulnerabilidad de las mujeres.
4. Que las mujeres no estén interesadas en el acompañamiento y por lo tanto desatiendan las sugerencias.

9. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Matriz de planificación del proyecto			
Acompañamiento Psicosocial y Jurídico a las Mujeres Víctima de Violencia Sexual en el Conflicto Armado de los Barrios Irotama, Ciudad Equidad, Divino Niño II y Ondas del Caribe de la Ciudad de Santa Marta			
Descripción	Indicador	Fuentes de verificación	Supuestos
Objetivo General: Contribuir al restablecimiento y respeto de los Derechos Humanos de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado interno de los barrios Irotama, Ondas del Caribe, La equidad y Divino Niño II de la ciudad de Santa Marta, asociadas a la Fundación FUNDEHUVICOL.			
	100 mujeres víctima de violencia sexual en el conflicto armado, acompañada psicosocial y jurídicamente sobre el respeto de los derechos humanos. Una organización civil fortalecida, asesorada y capacitada para la defensa y la promoción de los derechos humanos de sus asociados.	Registro de los participantes en el proceso (planillas de asistencia a espacios de trabajo). Registros de audio Relatorías de los espacios de trabajo realizados.	Voluntad de la organización, a través de su representante legal y de las mujeres víctima, de las Instituciones del Estado y las organizaciones sociales.
Objetivo Específico 1: Brindar acompañamiento jurídico, con			Voluntad de las mujeres víctimas

base en las rutas de apoyo institucional preestablecidas, a la fundación y a las mujeres víctimas asociadas a la Fundación para que acudan a interponer las denuncias de los hechos victimizantes, como a la reclamación de las indemnizaciones, y demás prestaciones de acuerdo a la oferta institucional que le correspondan por derecho.			de violencia sexual en el conflicto frente a la propuesta. Que por temor a represalias contra sus vidas, no presenten la denuncia ante las entidades del Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación.
Resultado 1: 90 mujeres de la FUNDEHUVICOL cuentan con capacitación e instrucción básica relacionadas con la reclamación de sus derechos ante las entidades estatales de todo orden y categoría para la satisfacción de sus derechos fundamentales.	90 mujeres formadas, orientadas y asesoradas jurídicamente en la defensa y reclamación de sus derechos fundamentales. 70 de las mujeres víctimas de violencia sexual realice sus respectivas denuncias antes las entidades del Estado como Fiscalía General de la Nación y Ministerio público. 80 de las mujeres víctimas de violencia sexual asista a los talleres sobre las normas jurídicas actuales, jurisprudencia,		

	norma instrumentos internacionales.		
Actividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseño de formato de caracterización. 2. Selección de participantes. 3. Diseñar programa de intervención. 4. Taller de formación en principios y derechos constitucionales, derechos humanos, mecanismos de protección de derechos. 	<p>Un documento que da cuenta de las mujeres que requieren la formación en la promoción y defensa de sus derechos.</p> <p>Listado de mujeres escogidas como beneficiarias del proyecto de intervención.</p> <p>Protocolo de intervención.</p> <p>80 mujeres acompañadas jurídicamente y legalmente.</p>	<p>Actas de reunión, registro fotográficos y de audios, listado de asistencia.</p> <p>Formato de encuestas.</p> <p>Informes de las actividades ejecutadas.</p> <p>Acompañamiento a la víctimas de violencia sexual en el proceso de sus denuncias.</p> <p>Folletos.</p>	
Resultado 2: El fortalecimiento de la organización civil, a través de sus representantes, en la promoción de los derechos humanos, y en la utilización de los mecanismos legales de protección de los mismos.	<p>Una organización civil que reúne miembros, los asesora y capacita para la defensa de sus derechos y la promoción y prevención de los derechos humanos de sus asociados.</p> <p>Funcionarios</p>		<p>Voluntad, interés y compromiso de los funcionarios y miembros de la Fundación y de las instituciones en la participación del proceso de formación.</p>

	capacitados en herramientas de atención jurídica.		
Actividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Taller de formación a las y los representantes de la Fundación, en la promoción de los derechos humanos. 2. Campaña de socialización de los instrumentos internacionales y nacionales de protección 	<p>Una organización capacitada para ejercer la defensa de los derechos de las mujeres asociadas.</p> <p>Las representantes de la Fundación serán formadoras en la promoción de los derechos humanos con orientación legal y jurídica nacional e internacional.</p>	<p>Actas de reunión, registro fotográficos y de audios, listado de asistencia.</p> <p>Folletos.</p>	
Objetivo Específico 2: Ofrecer servicios de apoyo psicosocial e la superación de los trastornos de estrés post traumático, y demás condiciones psicológicas generada por la experiencia del conflicto.	<p>80 mujeres acompañadas psicológicamente.</p> <p>90 de las mujeres beneficiadas cambien su perspectiva de discriminación a las que se ven sometidas.</p>		<p>Voluntad de las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto frente a la propuesta.</p> <p>Que por temor a discriminación o revictimización las mujeres no se atrevan a contar su experiencia de forma sincera, que permita la intervención adecuada.</p> <p>Que las mujeres no quieran recordar y contar lo que aconteció.</p>
	50 de las mujeres que más atención		

<p>Resultado 1: 75 mujeres beneficiarias obtengan atención específica en el tratamiento del dolor y sus traumas, como herramienta para cambiar su realidad.</p>	<p>requieran continúen su tratamiento a través de las entidades estatales.</p> <p>90 mujeres traten su dolor para iniciar el proceso de olvido.</p>		
<p>Actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccionando beneficiarias. 2. Diseñar programa de intervención. 3. Sesiones de terapias grupales e individuales. 	<p>Un documento que da cuenta de las mujeres que requieren la atención psicológica.</p> <p>Protocolo de intervención psicológica.</p> <p>80 mujeres atendidas psicológicamente.</p>	<p>Listados de asistencia y registro fotográficos.</p> <p>Formato diligenciado de historia de la mujer individualmente atendida.</p> <p>Formatos diligenciados de remisión cuando sea del caso.</p> <p>Informes de las actividades ejecutadas.</p> <p>Folletos.</p>	
<p>Resultado 2: La caracterización de las mujeres asociadas a las FUNDEHUVICOL permitirá ofrecer y direccionar las ayudas psicológicas y sociales frente a las entidades del Estado.</p>	<p>Un documento de priorización de la atención psicológica.</p>		

	Ruta de atención de las instituciones encargadas de la atención de las víctimas.		
Actividades: <ol style="list-style-type: none"> Selección de beneficiarias. Diseñar programa de intervención. Sesiones de terapias 	Listado de beneficiarias. Protocolo de intervención psicológica. 80 mujeres atendidas psicológicamente.		
Objetivo Específico 3: Promover, a través de la interacción con entidades educativas públicas y privadas, el acceso de la población objeto de estudios a programas de capacitación y emprendimiento.			La voluntad de las mujeres beneficiarias frente a la propuesta. La disposición de iniciar o continuar estudios en todos los grados o modalidades.
Resultado 1: 80 mujeres beneficiadas conocerán la ruta de apoyo institucional académico que les ofrezca oportunidades de superación personal para ingresar a la vida productiva en condiciones de competitividad.	50 mujeres que recibieron la charla logren matricularse en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias. Disminución del índice de analfabetismo en la ciudad de Santa		

	Marta.		
Actividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Proceso de caracterización para seleccionar beneficiarias. 2. Campaña de socialización de la oferta institucional en programas de educación, capacitación y emprendimiento vocacional. 	<p>Documento para determinar beneficiarias de acuerdo a actitud y vocación.</p> <p>Documento descriptivo de la ruta de apoyo institucional en materia de formación, educación, capacitación y emprendimiento.</p>		
Resultado 2: 70 mujeres obtendrán herramientas de auto ayuda y auto gestión para la producción de medios de subsistencia en condiciones de vida digna.	50 mujeres logren a través de la financiación pública o privada, la apertura de empresas comunitarias, micro y pequeñas empresas.		
Actividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Talleres de emprendimiento para formación de empresas. 2. Campaña de información sobre la ruta institucional de apoyo empresarial. 		<p>Listado de asistencia y registros fotográficos.</p> <p>Folletos de información educativa.</p> <p>Informes de las actividades</p>	

		ejecutadas.	
Objetivo Específico 4: Implementar mecanismos para lograr la sensibilización de las víctimas frente a la importancia de lograr el perdón y el olvido de los actos violentos que originaron su desgracia, en búsqueda del cumplimiento del principio fundante de la paz.			La voluntad de las mujeres beneficiarias frente a la propuesta. La resistencia de la mujer para conceder el perdón y el olvido a sus victimarios.
Resultado 1: 90 mujeres recibirán capacitación como multiplicadora y formadora en la promoción por el respeto a los Derechos Humanos, para mejorar la convivencia social, y conjurar una de las causas remotas de conflicto armado.			
Actividades: 1. Selección de beneficiarias. 2. Diseñar programa de intervención. 3. Sesiones de terapias grupales e individuales sobre el manejo del dolor, la ira, la importancia del perdón.	Un documento que da cuenta de las mujeres que requieren la intervención. Protocolo de intervención. Mujeres más felices, y relacionadas con el entorno que viven.	Listado de asistencia y registros fotográficos. Folletos de información. Informes de las actividades ejecutadas.	
Resultado 2: 80 mujeres fortalecerán el proceso de reconciliación y perdón para la superación de los traumas que les afectan y fomentar un país sin rencores y sin violencia.			La voluntad de las mujeres beneficiarias frente a la propuesta. La resistencia de la mujer para conceder el perdón y el olvido

			a sus victimarios.
Actividades: <ol style="list-style-type: none"> 1. Diseñar programa de intervención. 2. Sesiones de terapias grupales e individuales sobre el manejo del dolor, la ira, la importancia del perdón. 	Protocolo de intervención. Mujeres más felices, y relacionadas con el entorno que viven		

10. PRESUPUESTO POR PARTIDAS

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR POR MES O UNIDAD	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL PARTIDA
PERSONAL	Coordinador del proyecto	\$ 5.600.000.00	\$5.600.000.00	\$26.600.000.00
	3 Abogados	\$4.200.000.00	\$12.600.000.00	
	1 Psicólogo	\$4.200.000.00	\$4.200.000.00	
	1 Trabajador social	\$4.200.000.00	\$4.200.000.00	
EQUIPOS	2 Computadores portátiles	\$1.300.000.00	\$2.600.000.00	\$23.300.000.00
	1 Video Beam	\$2.500.000.00	\$2.500.000.00	
	1 Impresora	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	
	Papelería	\$1.700.000.00	\$1.700.000.00	
	Refrigerios	\$4.500.000.00	\$4.500.000.00	
	Alimentación	\$11.800.000.00	\$11.800.000.00	
EVENTOS	Transporte	\$ 4.800.000.00	\$ 4.800.000.00	\$ 4.800.000.00
	Capacitaciones	\$3.750.000.00	\$3.750.000.00	\$ 3.750.000.00
TOTAL				\$58.450.000.00

11. GLOSARIO

Bloque de Constitucionalidad: unidad jurídica compuesta por normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar de que puedan a veces contener mecanismos de reformas diversas al de las normas del articulado constitucional strictu sensu.

Conflicto Armado: Todos aquellos enfrentamientos en los que están involucradas las armas y su uso.

Delito Sexuales: Todo acto verbal o físico de contenido sexual que se comete contra una persona de cualquiera edad o sexos sin su consentimiento.

Desplazamiento forzado: Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad.

Derechos Humanos: Son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexos, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismo derecho Humanos sin discriminación alguna estos derechos son interrelacionado, interdependiente e indivisibles.

Discriminar: Seleccionar excluyendo. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.

Enfoque Diferencial: Es el reconocimiento de que hay poblaciones que por sus características particulares, en razón de su edad, género, orientación sexual, grupo étnico y situación de discapacidad, debe recibir un tratamiento especial en materias de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral.

Exclusión: Se relaciona de manera directa con la marginación ya que supone que las personas que sufre tal situación son dejada de lado por el resto de la sociedad.

Impunidad: Estado en el cual se encuentra un hecho delictivo que no ha sido debidamente castigado con la pena que el mismo establece.

Inequidad: Desigualdad.

Post- Conflicto: Periodo de tiempo que sigue a la superación total o parcial después del conflicto armado.

Víctima: Persona que sufre un daño o un perjuicio a causa de determinada acción o suceso.

Violencia de Género: Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada.

12. ANEXOS

Anexo No. 1: Árbol de Problema

Anexo No. 2: Árbol de Objetivo.

BIBLIOGRAFÍA

Acción Social. (2008). *"Documento de avance a lo ordenado por la Corte Constitucional en Auto 092 de 2008. Estrategia Nacional para la Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales de las Mujeres en Riesgo o en Situación de Desplazamiento"*. Bogotá. ACNUR. (2008).

Balance de la política pública para la atención integral de desplazamiento forzado en Colombia. Enero 2004 – abril 2007. Bogotá. Aguilar L. (1996). "Estudio introductorio". En Aguilar L. (Compilador).

Coordinación Nacional de Mujeres Afrocolombianas en Situación de Desplazamiento, Casa de la Mujer. (2007). *"Lineamientos para un Plan Integral de Prevención y Protección del Impacto Desproporcionado y Diferencial del Desplazamiento Forzado"*.

Constitución Política de Colombia de 1991.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo.

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo.

Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos facultativos.

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo facultativo.

Corte Constitucional de Colombia. *Sentencia T-721 de 2003*. Magistrado Ponente: Álvaro Tafur.

Corte Constitucional de Colombia. *Sentencia T-025 de 2003*. Magistrado Ponente Jaime Araujo.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 092 de 2008*. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 237 de 2008*. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 004 de 2009*. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 005 de 2009*. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 006 2009*. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 007 de 2009*. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.

Corte Constitucional de Colombia. *Auto 008 de 2009*. Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda.

Documento enviado a la Corte Constitucional de Colombia el día 8 de septiembre de 2008 en atención a lo ordenado en Auto 092/08. Bogotá. Corporación Sisma Mujer. Seminario virtual. Revista. Caja de Herramientas. Junio de 2011.

El estudio de las políticas públicas. Tomo 2. México: Porrúa. CODHES. "Boletín de prensa de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento". Disponible en: [www. codhes.org/info/Boletín/BOLETIN-69DEFINITIVO.pdf](http://www.codhes.org/info/Boletín/BOLETIN-69DEFINITIVO.pdf).

Cuarto Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.

Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción.

Convención sobre Municiones en Racimo.

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y tóxicas y sobre su destrucción.

Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas químicas y sobre su destrucción.

Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I).

Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II).

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos Protocolos Facultativos.

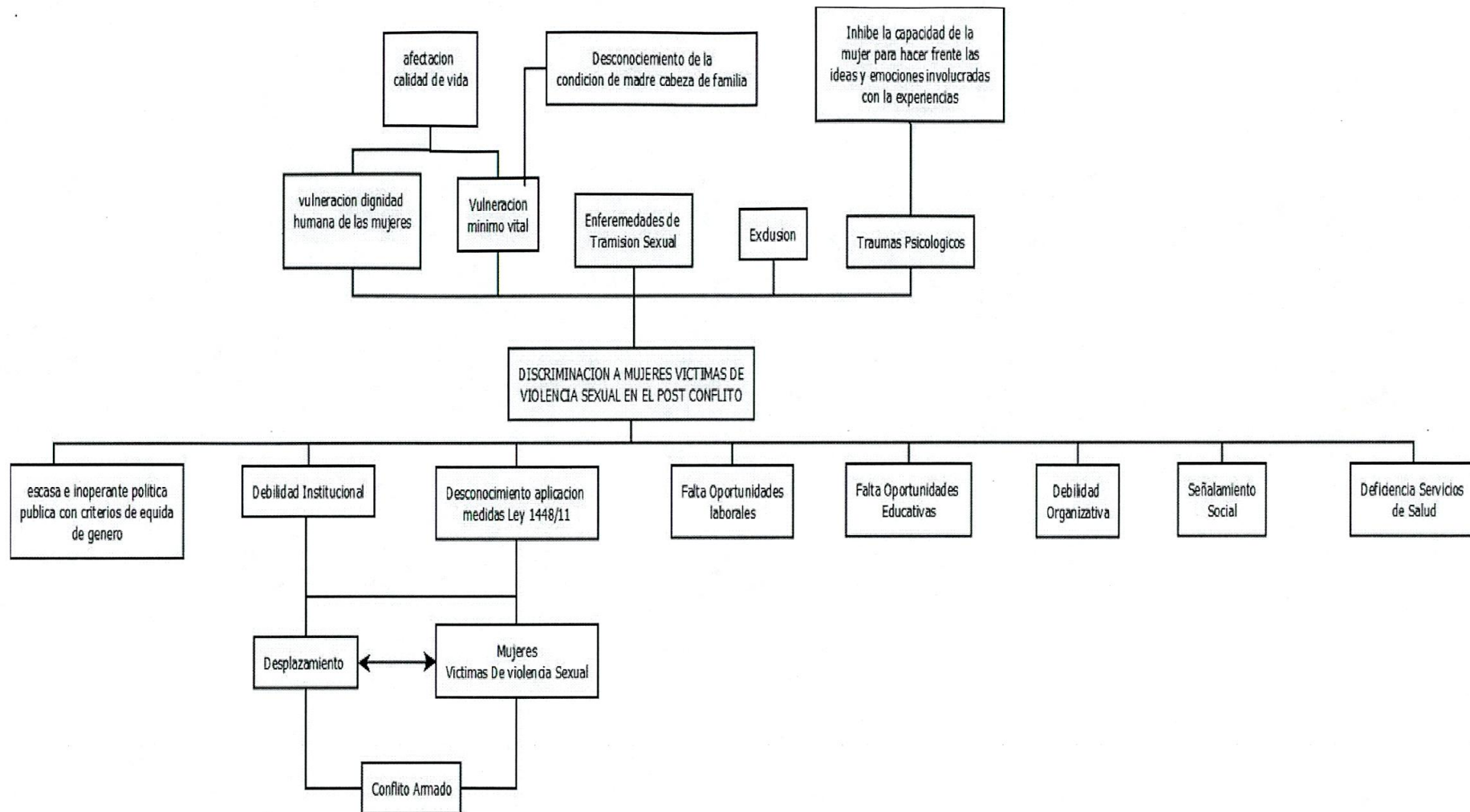
Primer Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Reglamento de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.

Segundo Convenio de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar.

Tercer Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.

Diccionario de la Real Academia de la Lengua. DPD. 1ª Edición. 2ª Tirada.



ARBOL DE OBJETIVOS

